



**DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL**-Al Alcalde y Secretaria de Hacienda de Cuitiva Boyacá por adjudicar subsidios de vivienda sin los requisitos de ley

**CONTRATACIÓN ESTATAL**-Se debe garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación

*Considera importante el Despacho, recordar para el caso en particular, lo dispuesto en el Artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, en donde se estableció la responsabilidad que atañe a las entidades Estatales, en garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación, dejando como obligación que dicha publicidad se realizará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública “SECOP”, en el sitio web indicado por el administrador. Lo anterior quiere decir que por cada proceso de selección que adelante una entidad pública debe existir en el SECOP la publicación del proceso.*

**FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN**-El Alcalde adjudicó subsidios de vivienda a personas que no cumplían con los requisitos legales

*Se encuentra que el Alcalde Municipal, afirmó dentro del plenario, que debido a sus actividades tenía conocimiento de la situación socio-económica de las personas del municipio y por tanto no es lógico que omitiera que los subsidios de vivienda a otorgar, debían ser asignados a personas sin posibilidad o recursos para acceder a casa propia. Es el Alcalde quien realizó las evaluaciones y asignación de los puntajes de los postulantes y solo él quien tenía bajo responsabilidad el velar por el cumplimiento de los preceptos legales establecidos para acceder a los subsidios motivo de las diligencias; permitiendo en algunos de los casos que personas sin el lleno de los requisitos legales, lograran beneficiarse con la adjudicación del subsidio de vivienda, presentándose así el incremento patrimonial a favor de terceros señalado en el cargo, prueba suficiente de ello es la adjudicación de subsidios a personas que contaban con propiedades a su nombre y por tanto no merecedoras legales de tal beneficio, vulnerándose la finalidad del subsidio.*

**RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA**-El Alcalde asumió en forma personal lo relacionado con la adjudicación de los subsidios de vivienda

*En cuanto a lo que trata con la existencia en el fallo de Primera Instancia de una responsabilidad objetiva, basando la misma en que no se pudo o se procuró determinar el servidor público en el que recaía la obligación de cumplir con la publicación a que se refieren las diligencias, este Despacho señala, que la defensa no toma en cuenta, que el Alcalde Municipal dentro de las intervenciones realizadas en el plenario, como se dijo anteriormente, aseguró que asumió el proceso y/o la responsabilidad en forma personal en relación a los subsidios de vivienda; más aún, no se tiene en cuenta, que si bien, puede existir responsabilidad en uno u otro funcionario en relación a la función administrativa de girar los documentos necesarios para lograr la publicación a que se refiere el proceso, dicha responsabilidad no es la base de la acusación y decisión tomada en primera instancia, sino que la misma se encuentra dirigida al deber funcional de control y verificación que debía ejercer el burgomaestre sobre los eventos cumplidos dentro de la administración por él dirigida y sumado a ello, el reconocimiento por el mismo disciplinado, referida con el hecho que él asumió de forma personal lo relacionado con tal adjudicación; reconocimiento que deja sin piso la necesidad de buscar mayor número de responsables, cuando es el mismo disciplinado quien se responsabiliza personalmente, excluyendo tajantemente a otro u otros servidores.*



**VALORACIÓN PROBATORIA**-No se hizo un adecuado análisis de los proponentes al subsidio/**RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA**-El Alcalde reconoció que tenía conocimiento de la situación socio-económica de los residentes en su municipio

*Se afirma que en la imputación de cargos hecha por el A-quo, se da por descontada la mala fe de la administración al beneficiar a quienes no tenían derecho y se observa que las pruebas que dieron lugar a la identificación de posibles beneficiarios que no tenían derecho al subsidio de vivienda, "(...) surgieron y fueron conocidas mucho tiempo después de producida la adjudicación", no siendo el disciplinado quien escrituró los inmuebles que a la postre constituyen el subsidio. En este punto el Despacho no encuentra razón a tal afirmación, pues la actuación disciplinaria desarrollada y valorada por esta regional, se dirigió a establecer probatoriamente las afirmaciones realizadas dentro de la queja presentada, por tanto no es el A-quo quien asume la existencia del hecho en violación del Principio de Buena Fe, sino que se trata de encontrar elementos que permitan descartar una afirmación presentada por quien se encuentra en desacuerdo de lo actuado por la administración municipal de Cuitiva. Como se dijo en argumentación anterior de esta decisión, los elementos con los cuales cuentan los servidores públicos para verificar la veracidad de la información suministrada y documentos aportados por los ciudadanos, para acceder a beneficios como el que es motivo de las diligencias, son amplios y variados, entre los que se cuenta el acceso a la base de datos de otras entidades en forma electrónica y remota, así como la solicitud escrita a los mismos; podemos reiterar, la base de datos del Registro de Instrumentos Públicos y no solo lo relacionado con el registro SISBEN. El mismo Alcalde ha reconocido dentro del plenario, que contaba con el conocimiento en relación a la situación socio-económica de los residentes en su municipio, motivo mayor para apoyar la decisión tomada por la Primera Instancia, ya que no solo se omitió el realizar un adecuado análisis de los proponentes al subsidio, por intermedio de las posibilidades técnicas y electrónicas que la realidad actual brindaba, sino de la misma forma prefirió ignorar su saber personal. No es de recibo que se pretenda asegurar que el Alcalde, estaba obligado a seleccionar a los proponentes por el solo hecho de estar registrado en el SISBEN.*

**CONFLICTO DE INTERESES**-La Secretaria de Hacienda del municipio de Cuitiva hizo parte del Comité de Vivienda y del programa de vivienda/**CONDUCTA DOLOSA**-Se configuró

*La Secretaria de Hacienda del municipio de Cuitiva, hizo parte del Comité de Vivienda en el año 2011, participando activamente en la convocatoria para ejecutar el programa de vivienda de interés social denominado Urbanización Bochica, convocatoria a la que se presentó como postulantes el padre de la hija de la disciplinada, quien resultó favorecido para recibir subsidio de vivienda. Encuentra el Despacho que hay elementos suficientes, que permiten afirmar que la disciplinada desconoció que le asistía el deber de declararse impedida a la luz del Artículo 40 de la ley 734 de 2002.*

*Por tanto, la disciplinada al no observar la existencia de motivos suficientes para declararse impedida en el proceso de convocatoria del programa de vivienda de interés social denominado Urbanización Bochica, siendo miembro del Comité de Vivienda en el año 2011 del municipio de Cuitiva, se vio incurso en la falta prevista en el artículo 48 numeral 17 de la Ley 734 de 2002.*

*Lo relacionado con el dolo atribuido a lo actuado por la disciplinada, este Despacho como se argumentó anteriormente, encuentra acertada la calificación dada por la Procuraduría Provincial, ya que existen los elementos probatorios necesarios para llegar sin lugar a*



*duda a determinar la existencia del Dolo.*

**CONCURSO DE FALTAS DISCIPLINARIAS**-Por los actos de publicación en la adjudicación del subsidio de vivienda de interés social y su respectiva asignación

*Es indudable para esta Instancia a la luz de los elementos probatorios existentes, que en relación al disciplinado en su condición de Alcalde del municipio de Cuitiva Boyacá, se encuentran materializados los cargos formulados, en lo que tiene que ver con los actos de publicación de la adjudicación del subsidios de vivienda de interés social del proyecto Urbanización Bochica y la asignación de los subsidios a los ciudadanos, llevado a cabo en la misma fecha; por lo cual se le atribuye la comisión de la infracción de varias disposiciones de la ley disciplinaria, lo que constituye un concurso ideal de faltas, dado que con varias acciones infringe tantos preceptos normativos; por tanto la Procuraduría Provincial de Sogamoso de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 numeral 2 literal a) de la ley 734 de 2002, decidió aplicar sanción disciplinaria consistente en DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL por el término de Once (11) años, al Alcalde Municipal, teniendo en cuenta que la falta fue calificada de manera definitiva como GRAVÍSIMA, a título de CULPA GRAVÍSIMA.*

**FALTA GRAVÍSIMA DOLOSA**-Cometida por la Secretaria de Hacienda por no declararse impedida en el proceso de asignación de los subsidios de vivienda

*De igual manera en relación a la Secretaria de Hacienda de Cuitiva Boyacá, esta Regional encuentra materializado y no desvirtuado el cargo formulado en relación con su intervención en la gestión de la convocatoria adelantada en el año 2011 por el municipio de Cuitiva para la asignación de subsidios de vivienda de interés social del proyecto Urbanización Bochica, sin que se declarara impedida ante la intervención en dicho proceso por parte del padre de su menor hija, quien resultó favorecido; por lo que se califica por parte del A-quo la falta encontrada como falta gravísima a título de dolo, asignando por esto como sanción, la DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL por el término de Diez (10) años, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 44 numeral 1 de la Ley 734 de 2002.*

**DERECHO DISCIPLINARIO**-Jurisprudencia de la Corte Constitucional



<b>DEPENDENCIA</b>	<b>:</b>	<b>PROCURADURIA REGIONAL DE BOYACÁ.</b>
<b>RADICACIÓN N°</b>	<b>:</b>	<b>IUS-2015-231032 / IUC-2015-571-779836 / RC-000336</b>
<b>A-QUO</b>	<b>:</b>	<b>PROCURADURIA PROVINCIAL DE SOGAMOSO</b>
<b>DISCIPLINADOS</b>	<b>:</b>	<b>CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS y MIRZA YANETH RAMOS CORREA</b>
<b>CARGO Y ENTIDAD</b>	<b>:</b>	<b>Alcalde y Secretaria de Hacienda Municipal de Cuitiva – Boyacá.</b>
<b>QUEJOSO</b>	<b>:</b>	<b>ISMAEL GUANUME MOLINA y OTRA.</b>
<b>FECHA DE LA QUEJA</b>	<b>:</b>	<b>22 de Mayo de 2015</b>
<b>FECHA HECHOS</b>	<b>:</b>	<b>4 de Marzo de 2012</b>
<b>CONDUCTA</b>	<b>:</b>	<b>Presuntas irregularidades en la adjudicación de subsidios para vivienda de interés social.</b>
<b>ASUNTO</b>	<b>:</b>	<b>Fallo de Segunda Instancia.</b>

Tunja, 28 de junio de 2016.

No. 012.

### **ASUNTO A TRATAR**

Procede la Procuraduría Regional de Boyacá a resolver el Recurso de Apelación interpuesto por el doctor HERNANDO PRADA TAPIA, en calidad de Apoderado del señor CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS y la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA<sup>1</sup>, contra el Fallo de Primera Instancia proferido por la Procuraduría Provincial de Sogamoso de fecha 26 de noviembre de 2015<sup>2</sup>, en desarrollo de audiencia en proceso verbal.

Adelantado el respectivo trámite, la Procuraduría Provincial de Sogamoso - Boyacá, mediante Auto de fecha 26 de noviembre de 2015, profirió Fallo de Primera Instancia identificado con IUS-2015-231032 / IUC-2015-571-779836, adelantado en contra del señor CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS y la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, en calidad de Alcalde y Secretaria de Hacienda Municipal de Cuitiva – Boyacá respectivamente.

Inconformes con la decisión, del señor CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS y la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, en cumplimiento de las solemnidades propios del proceso verbal y dentro del término legal interpusieron Recurso de Apelación, razón por la cual la Procuraduría Provincial de Sogamoso - Boyacá, en desarrollo de la audiencia verbal de fecha 26 de noviembre de 2015<sup>3</sup>, concedió el recurso de apelación, disponiendo “(...) el envío de la actuación a la segunda instancia para los trámites pertinentes, realizando el procedimiento dispuesto para tal efecto”.

---

<sup>1</sup>Folio 521

<sup>2</sup> Folios 470 a 522

<sup>3</sup> Folio 522



Esta Regional es competente para desatar el recurso de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 Numeral 3º del Decreto 262 de 2000, por lo que procede a resolver el recurso de apelación, en los términos del artículo 171 de la Ley 734 de 2002.

### **IDENTIDAD DE LOS INVESTIGADOS**

Los Servidores Públicos investigados son; CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 9.398.351, en calidad de Alcalde Municipal de Cuitiva – Boyacá en el periodo constitucional 2008-2011 y, MARITZA YANETH RAMOS CORREA, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 1.051.522.053, en su condición de Secretaria de Hacienda Municipal de Cuitiva – Boyacá para el momento de los hechos.

### **RESUMEN DE LOS HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL**

#### **La Queja.**

Originó la actuación presente disciplinaria la compulsa de copias realizada por parte de la Procuraduría Provincial de Sogamoso dentro de Auto de fecha 22 de mayo de 2015<sup>4</sup>, en el que se efectúa el archivo definitivo de proceso disciplinario adelantado bajo radicado N° IUS-2010-414180 / IUC-2011-571-339707, y en donde se advirtió en etapa de Indagación Preliminar, la existencia de nuevos elementos probatorios en el que se señalaban *“(…) presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de beneficiarios del subsidio de vivienda de interés social en el marco del proyecto Bochica”*<sup>5</sup>, hechos no investigados dentro del proceso disciplinario archivado, por el ingreso tardío de tales antecedentes, requiriendo el inicio de nuevas acciones disciplinarias de carácter investigativo, con el propósito de *“(…) determinar si se hizo público el proceso de selección y adjudicación de los subsidios para vivienda de interés social en el marco del proyecto Bochica que se desarrolla en el Municipio de Cuitiva en relación con el presunto incumplimiento de los requisitos para ser beneficiario como la residencia, acreditación de no ser propietario de inmuebles, clasificación en el SISBEN en estrato 1 y 2 o la que corresponda en equivalencia y su inclusión como población pobre y vulnerable verificando se llene la exigencia de habitabilidad por el termino previsto en la ley”*<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Folios 1 a 14

<sup>5</sup> Folio 29 – “DESGLOSE DE DOCUMENTOS” Líneas 5 y 6

<sup>6</sup> Folio 31 – Segundo Párrafo



### **Indagación Preliminar.**

Mediante Auto de fecha 7 de julio de 2015<sup>7</sup>, la Procuraduría Provincial de Sogamoso en los términos del Artículo 150 de la Ley 734 de 2002, resuelve abrir Indagación Preliminar en contra CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS, en calidad de Alcalde Municipal de Cuitiva – Boyacá y demás funcionarios responsables para la época de los hechos, en atención a “(...) *presuntas irregularidades descritas en el escrito de la queja y en el auto de fecha 22 de mayo de 2015*”; teniendo como medios de prueba los documentos que ya obraban en el proceso y, ordenando y practicando nuevas pruebas.

### **Procedimiento Especial Verbal.**

En atención a los documentos, las diligencias adelantadas y pruebas arrimadas al plenario, la Procuraduría Provincial de Sogamoso, resuelve una vez verificados los requisitos de ley, mediante Auto de fecha 28 de Agosto de 2015<sup>8</sup>, realizar la aplicación del procedimiento verbal, citando a Audiencia al señor CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS, en su condición de Alcalde Municipal de Cuitiva, y a la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, en su condición de Secretaria de Hacienda y miembro del Comité de Vivienda de la Alcaldía de Cuitiva – Boyacá; por posibles irregularidades evidenciadas en la gestión, manejo y adjudicación de los subsidios de familia de la convocatoria para el programa de interés social denominado Urbanización Bochica, materializado el día 12 de diciembre de 2011.

### **Formulación de Cargos.**

Dentro del Auto de fecha 28 de Agosto de 2015 en el cual se cita a Audiencia, la Procuraduría Provincial de Sogamoso realiza Formulación de Cargos en contra del señor CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS en calidad de Alcalde Municipal de Cuitiva, en los siguientes términos:

#### ***“Cargo primero***

*Al señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía 9398351, en su condición de alcalde de Cuitiva – Boyacá, quien tomó posesión del cargo el 30 de diciembre de 2007, según acta de posesión ante la Notaría única del circuito de Pesca del 30 de diciembre de 2007 (fls. 43-45), para ejercer el cargo de Alcalde Municipal para el periodo comprendido entre el año 2008 y el año 2011, porque en tal condición, el 25 de noviembre de 2011, al parecer publicó la Resolución 048 de la misma fecha, a través de la cual dio a conocer la asignación de los VEINTE (20) subsidios de vivienda de interés social para el área urbana del municipio bajo los*

---

<sup>7</sup> Folios 28 a 35

<sup>8</sup> Folios 92 a 104



*parámetros establecidos en la ley en la modalidad de construcción de vivienda nueva prioritaria en predios del ente territorial, mediante la cartelera del municipio, según la constancia de publicación fijada en la misma fecha y desfijada el 1 de diciembre de 2011 (fl.102), con lo cual, presuntamente desconoció el deber que le imponía dar a conocer tal asignación a través de medios masivos de comunicación social y de la forma prevista para el efecto reglamentariamente. Conducta con la cual pudo desconocer el deber que le obligaba acatar la ley y los reglamentos establecidos para el efecto, en tanto omitió lo dispuesto por el artículo 34 del Decreto 599 de 1991, pudiendo incurrir en la falta prevista en el artículo 34 numeral 1 de la ley 734 de 2002”<sup>9</sup>.*

Se señalaron como normas violadas y concepto de la violación en relación al primer cargo, el Artículo 209 Constitucional; Artículo 34 del Decreto 599 de 1991, reglamentario de la Ley 3ª de 1991; Artículo 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002<sup>10</sup>.

#### **“Segundo cargo**

*Al señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía 9398351, en su condición de alcalde de Cuitiva – Boyacá, quien tomó posesión del cargo el 30 de diciembre de 2007, según acta de posesión ante la Notaría única del circuito de Pesca del 30 de diciembre de 2007 (fls. 43-45), para ejercer el cargo de Alcalde Municipal para el periodo comprendido entre el año 2008 y el año 2011, porque en tal condición, el 12 de diciembre de 2012, al parecer otorgó un subsidio de vivienda de interés social, favoreciendo a los señores **JORGE NELSON CRUZ RIAÑO, JUAN CARLOS CARDOZO MORALES, VÍCTOR ÁNGEL CARDOZO PIRAGUATA, FLOR ÁNGELA MACÍAS RIVERA Y MARIA EUGENIA LEMUS RODRÍGUEZ**, presuntamente desconociendo que la finalidad del subsidio es ser otorgado a personas que carecen de recursos para adquirir vivienda, en la medida en que las personas mencionadas, tenían títulos de propiedad a su favor, acción con la cual pudo incrementar injustificadamente el patrimonio de las referidas personas, toda vez que con dicho actuar, al otorgar los subsidios de vivienda a beneficiarios que al parecer contaban con recursos para adquirir vivienda, transgrede la normatividad que rige la materia en lo que tiene que ver con los llamados a ser beneficiarios del subsidio aludido, acorde con las reglas establecidas en el Decreto 020 del 2 de mayo de 2011 (fls. 78-81 Anexo) y de manera especial el artículo 6° y 7° de la ley 3 de 1991, modificado por el artículo 1° de la ley 1432 de 2011, modificado por el artículo 28 de la ley 1469 de 2011, en la medida en que no se acredita la condición de ser personas que carecían de recursos para obtener una vivienda, lo que puede configurar una irregularidad constitutiva de falta disciplinaria a la luz del artículo 34 numeral 1 de la ley 734 de 2002, por el incumplimiento de la ley y, en consecuencia, dada la conducta*

---

<sup>9</sup> Renverso Folio 97

<sup>10</sup> Folio 98



*reprochada del presunto incremento patrimonial a favor de terceros, posiblemente incurre en la falta prevista en el artículo 48 numeral 3 ibídem”<sup>11</sup>.*

Se señalaron como normas violadas y concepto de la violación en relación al segundo cargo, el Artículo 209 Constitucional; Artículos 34 numeral 1 y 48 numeral 3 inciso segundo de la Ley 734 de 2002<sup>12</sup>.

En relación a la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA en el Auto de fecha 28 de Agosto de 2015, la Procuraduría Provincial de Sogamoso formulo como Cargo Único en los siguientes términos:

***“Cargo único***

*A la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía 1051522053, en su condición de Secretaria de Hacienda del municipio de Cuitiva – Boyacá (fls. 83, 92, 96-97), porque en tal condición, para el 13 de junio de 2011 intervino como miembro del Comité de Vivienda del municipio de Cuitiva, creado para adelantar los trámites pertinentes con la convocatoria de la Urbanización Bochica, como programa de vivienda de interés social de la Alcaldía de Cuitiva, presuntamente sin que se pronunciara respecto del interés que le asistía para el postulante ROVIN HELVER VARGAS PEDRAZA, identificado con cédula de ciudadanía 1057574745, saliera favorecido, en la medida en que dicho señor era el progenitor de su hija NICCOL ESTEFANI VARGAS. Persona que fue evaluado, seleccionado y beneficiado para otorgarle el subsidio, según el decreto 040 del 12 de diciembre de 2011. Conducta con la cual pudo transgredir el deber que le implicaba el cumplimiento de la ley a la luz del artículo 34 numeral 1 de la ley 734 de 2002, en la medida en que omitió declararse impedida para participar en el Comité de Vivienda del municipio de Cuitiva para el año 2011, dado su posible particular interés para favorecer al padre de su descendiente, a la vez actuó en la gestión del trámite de dicha convocatoria, pese al conflicto de intereses en el que se encontraba”<sup>13</sup>.*

Se señalaron como normas violadas y concepto de la violación en relación al primer cargo, el Artículo 209 Constitucional; Artículos 34 numeral 1, 40, 48 numeral 17 de la Ley 734 de 2002<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Folio 99 y reverso

<sup>12</sup> Reverso Folio 99

<sup>13</sup> Reverso Folio 101

<sup>14</sup> Reverso Folio 101





### **Calificación de la falta.**

Finalmente en el Auto de fecha 28 de Agosto de 2015, la Procuraduría Provincial de Sogamoso realiza la calificación de la falta así:

*“(...) calificada así provisionalmente de manera específica para el señor **CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS**, endilgadas a título de **CULPA GRAVÍSIMA** y para la señora **MIRZA YANETH RAMOS CORREA**, como **FALTA GRAVÍSIMA**, a título de **DOLO**, en relación con las posibles irregularidades evidenciadas la gestión, manejo y adjudicación de los subsidios de familia de la convocatoria para el programa de interés social denominado Urbanización Bochica, materializado el 12 de diciembre de 2011, en la forma y términos previstos en la parte motiva de esta determinación y de acuerdo con lo normado por el artículo 177 y ss. de la ley 734 de 2002”<sup>15</sup>.*

### **Descargos y Alegatos de Conclusión.**

Con fecha 23 de septiembre de 2015 en audiencia pública dentro del asunto en cuestión<sup>16</sup>, en donde previo el cumplimiento de los requisitos procesales, se señala que el señor CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS manifiesto, que dentro de lo a él permitido, se establecieron las normas sobre las cuales se realizaría el proceso de selección y los requisitos para los posibles beneficiarios, en donde se incluyó una cláusula en la que las personas debían allegar la información real, siendo el proceso en general del conocimiento total del Personero Municipal; se afirma que una vez realizado el proceso de selección, solo 20 personas allegaron requisitos exigidos por lo cual una vez evaluado, se efectuó el acto administrativo para la asignación de subsidios.

En relación a la publicidad dada al proceso, se afirma que *“(...) todo se hizo a través de la cartelera municipal porque el municipio no cuenta con medios de comunicación propios ni masivos”<sup>17</sup>*; asegurando que se cumplió con el cronograma establecido sin desconocimiento de lo reglamentado para tal evento, no presentándose con los documentos para acceder al subsidio sino 20 beneficiarios a quienes se les asigno subsidio; confrontado el señor LOPEZ ROJAS con el hecho de concurrir decisión judiciales que ordenan la devolución de subsidios ante la existencia de irregularidades, manifiesta que se trata de una acción popular que se encuentra apelada. En relación a las personas que se presentaron, los requisitos exigidos y la verificación de los mismos, afirmo, que solo 20 cumplieron con la documentación exigida, siendo eso voluntad de las personas que querían acceder al subsidio, ignorando el motivo por el cual no se presentaron más personas, ya que según él *“(...) todo mundo se enteró”<sup>18</sup>*.

---

<sup>15</sup> Renverso Folio 103

<sup>16</sup> Folios 189 a 199

<sup>17</sup> Folio 191 – Línea 6 a 8

<sup>18</sup> Folio 192 – Línea 15



Afirma el señor CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS que no tenía conocimiento que las personas favorecidas con el subsidio tenían propiedades a su nombre, reconociendo que uno de los requisitos era que carecieran de vivienda y/o de los recursos para adquirirla; asegura que algunas de las personas accionantes en la acción judicial que termino con sanción a la Alcaldía y orden de devolución de algunos subsidios, no se presentaron a la convocatoria. Asegura el señor CARLOS HERNANDO LOPEZ, que en su condición de Alcalde Municipal, conocía a las personas habitantes del municipio, conociendo *“(...) su condición social, económica, educativa”*<sup>19</sup>; ante la interrogante relacionada con las personas asignadas de verificar el cumplimiento de los requisitos, en primera instancia afirma que fueron designados los Secretarios de Despacho para tal fin y el personero, pero más adelante asegura que él mismo realizó la revisión de los requisitos en atención a lo dispuesto en el Decreto 020 de 2011, pero que *“(...) ME era muy difícil revisar papel por papel”*<sup>20</sup>; además en contradicción a lo expuesto anteriormente, afirma que *“(...) No se delegó”*<sup>21</sup>, la función de revisión de los requisitos a ningún funcionario, pero que el Secretario de Gobierno por razón del manual de funciones *“(...) era el encargado de vigilar todo lo de la alcaldía”*<sup>22</sup>. Se ratifica el hecho que solo existió publicidad al proceso de adjudicación de los subsidios de vivienda en la cartelera de la Alcaldía Municipal y dicha adjudicación correspondió a su administración como Alcalde.

Posteriormente, el defensor de confianza del señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, presentó escrito correspondiente a los Alegatos de Conclusión, en donde en referencia al primer cargo endilgado, afirma que la conducta es atípica, toda vez que con los testimonios rendidos por los ciudadanos BERNARDO ROJAS TOCA, JUNA CARLOS FONSECA MORALES, ANDREA YAMILE CORREA CORREA, JORGE NELSON CRUZ RIAÑO, MARIA ROSULA CRUZ RIAÑO, VICTOR ÁNGEL CARDOZO, VÍCTOR DANILO MORALES, YULI ESPERANZA MENJUREN SUÁREZ, ANA VICTORIA ANA VICTORIA OJEDA CEPEDA, MARIA DE JESÚS MOGOLLÓN, LUIS MARCELO LÓPEZ y MARIO HERNANDO JAIME CARDOZO, este último quien se desempeñaba como Personero Municipal del año 2011, se sustrae la publicación de los actos de la convocatoria adelantada en el año 2011, por la alcaldía de Cuitiva para asignar subsidios de vivienda de interés social para el proyecto denominado Urbanización Bochica, que se realizó mediante la cartelera municipal, considerándolo el medio masivo de comunicación que se utilizó para dar a conocer a la comunidad los relacionados con los subsidios para adquirir vivienda de interés social en el proyecto denominado Urbanización Bochica; hace énfasis en la existencia de elementos documentales que indican que en la Alcaldía de Cuitiva no se cuenta con corresponsal de periódicos de circulación nacional o departamental y mucho menos distribuidores, considerando por tanto que no se podía obligar la inclusión de la información

---

<sup>19</sup> Folio 193 – Línea 15

<sup>20</sup> Folio 193 – Líneas 28 y 29

<sup>21</sup> Folio 193 – Última línea

<sup>22</sup> Folio 194 – Línea 1



aludida en las diligencias, en un medio masivo de comunicación nacional, cuando ningún habitante del municipio lo podía adquirir.

Se pretende justificar la existencia de una adecuada publicidad dada al proceso, advirtiendo que la lista de postulantes interesados o aspirantes fue conformada por 50 personas, siendo esto para la defensa indicio claro que la comunidad estuvo bien informada y enterada sobre el proyecto de vivienda denominado Urbanización Bochica. Finaliza argumentando frente al primer cargo que al enmarcarse la falta en el artículo 34 numeral 1 de la ley 734 de 2002, se torna la misma en un enunciado normativo amplio resultando difícil ir más allá de lo argumentado, aunque considera que ha desvirtuado el cargo ante la inexistencia de la conducta y de los elementos que configuran la responsabilidad del investigado, la tipicidad y la antijuridicidad de la conducta y la modalidad de la culpabilidad, motivo por el que se solicita la absolución del investigado.

Por su parte al intervenir la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, ella asegura la existencia de un yerro jurídico en lo actuado, que afecta sustancialmente el debido proceso y su derecho a la defensa, en atención a la ambigüedad de la falta indilgada, ante lo cual el despacho de primera instancia realiza las precisiones del caso, señalando que se trata de la posible omisión para declararse impedida en el trámite que realizó como miembro del Comité de Vivienda, dentro de la convocatoria a la que se refieren las diligencias, desconociendo así normas preestablecidas en tal sentido. Afirmar la señora RAMOS CORREA, que se declaró impedida verbalmente ante el Secretario de Gobierno del Municipio, afirmación que respalda con la ausencia de su firma en las actuaciones adelantadas para la recepción de documentos y evaluación de beneficiarios, por tanto, no teniendo ninguna participación en tal decisión y apareciendo su firma solo en la entrega de los subsidios, momento en el cual ya existía una decisión. Se asegura, que su firma solo aparece en documentos en los cuales no existe relación con la decisión de asignación de los subsidios y además, que para esa época no convivía con el padre de su hija, por lo cual considera injustificado el cargo impuesto<sup>23</sup>. Finalmente se solicita por parte de los investigados la realización de algunas pruebas a las cuales accede el despacho y suspende la diligencia.

Se anexa a las diligencias acta de Visita Especial realizada por parte de la Personería Municipal de Cuitiva, según comisión, el día 28 de septiembre de 2015<sup>24</sup>, en la cual se pretendía verificar la existencia de *“(...) negocio, persona natural o jurídica o establecimiento comercial que se dedique a la venta o distribución de periódico de cubrimiento nacional o departamental”*, encontrando en tal diligencia una relación de 19 lugares en los cuales se realizó la diligencia, indicando que *“(...) dentro de sus actividades ninguno de estos se dedican a la venta y distribución de*

---

<sup>23</sup> Folios 194 a 197

<sup>24</sup> Folios 241 a 242



*periódico de cubrimiento Nacional o departamental”.*

Se anexa a las diligencias acta de Visita Especial realizada a la Alcaldía Municipal de Cuitiva, por parte de la Personería Municipal de Cuitiva, según comisión, el día 28 de septiembre de 2015<sup>25</sup>, en la que se pudo establecer la existencia de diferentes procesos de selección y adjudicación de proyectos de interés social en los cuales se realizó la información a la comunidad. Dentro de las diligencias se determinó, la existencia de un proceso que realizó convocatoria para la adjudicación de subsidios para la construcción de viviendas de interés social, en donde se encuentra Resolución N° 016 del 10 de septiembre de 2013 en donde se advierte *“(…) La cual fue publica para conocimiento de la comunidad en Cartelera Municipal, según constancia expedida por la secretaría de Gobierno y así mismo fue difundida por la Emisora “Corporación Radial la Voz del Lago” de acuerdo a certificación que se anexa a dicha resolución”*; de la misma forma se advierte la existencia de las Resoluciones N° 048 del 28 de agosto de 2014 y 054 del 9 de diciembre de 2014 en las cuales la publicidad se limitó a la cartelera municipal.

### **Fallo de Primera Instancia.**

Cumplida la ritualidad procesal, así como analizados cada uno de los elementos que hacen parte del expediente, dentro de audiencia pública del proceso verbal adelantada el día 26 de noviembre de 2015, la Procuraduría Provincial de Sogamoso profiere Fallo de Primera Instancia en el caso que involucra al señor CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS, en su condición de Alcalde Municipal de Cuitiva, y a la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, en su condición de Secretaria de Hacienda y miembro del Comité de Vivienda de la Alcaldía de Cuitiva – Boyacá, en los siguientes términos:

En relación al señor CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS, en su condición de Alcalde Municipal de Cuitiva, la Procuraduría Provincial de Sogamoso indicó:

*“(…) Respecto de los descargos presentados por el investigado y alegatos de la defensa, este despacho se aparta de sus apreciaciones en el sentido de hacer ver que la conducta endilgada como irregular no existió, en tanto la publicación de los actos de la convocatoria adelantada para la asignación de subsidios que acapara nuestra atención se realizó a través de la cartelera municipal, que en el sentir de la defensa era el medio masivo con el que contaba la administración, toda vez que con los análisis normativos esbozados se evidencia que la finalidad de la publicación en medios masivos es acreditar la participación de la comunidad en igualdad de condiciones para que puedan acceder al subsidio de vivienda de interés social como un tema específico del desarrollo de los fines del estado en la garantía del derecho de vivienda de la población más vulnerable.*

---

<sup>25</sup> Folios 243 a 244



*Igual se aparte de la consideración de la defensa al afanarse en acreditar que en el municipio no se contaba con expendios de periódicos ni distribuidores de medios masivos de comunicación, lo que en efecto demuestra con el análisis de algunos testimonios que así lo indican, pero desestima que si bien existía la cartelera como el medio regular de publicación de los actos de la administración municipal de Cuitiva, también se hacía uso del perifoneo para dar a conocer los asuntos en las veredas y se utilizaban los anuncios en emisoras que si bien no eran locales, tenían la frecuencia en el municipio tal como se analizó del acervo probatorio obrante en el proceso.*

*No son de recibo las alegaciones de la defensa para acreditar que si se presentaron CINCUENTA (50) postulados es porque la comunidad si tuvo la oportunidad de enterarse, en primer lugar porque en lo que se ha hecho énfasis es en la publicación del acto de adjudicación de los subsidios, llevado a cabo el 12 de diciembre mediante la Resolución 040, sobre la cual precisamente los interesados o quienes se consideraran afectados podían presentar sus observaciones o reclamaciones, las que en este caso precisamente no aparecen ni figuran como consecuencia de la falencia de la idoneidad de la publicidad de dicho acto.*

*Por otro lado, no puede pasar inadvertido como se expuso anteriormente que la existencia de CINCUENTA postulados aparece en duda, conforme con el testimonio de los señores SAMUEL RAMOS RIVERA y ÁNGEL URIEL CORREA RAMOS, quienes fueron los únicos testigos diferentes a los beneficiarios que acudieron a rendir testimonio respecto de su intervención como inscritos en el proceso aludido y negaron de manera enfática su postulación en la convocatoria para ser beneficiarios del subsidio de vivienda de interés social denominado Urbanización Bochica del año 2011, luego no entendían por qué su nombre aparecía en el listado de postulados visible a folios 100 a 101 del Anexo 1. Además de que en las carpetas allegadas por la administración municipal como los expedientes de cada uno de los postulados y beneficiarios que hicieron parte de la referida convocatoria, paradójicamente solo aparecen las de los VIENTE (20) beneficiarios, sin que se tenga algún registro de los restantes TREINTA (30) presuntos postulados. Amén de que los actos de inscripción o solicitudes para ser beneficiarios tampoco aparecen, lo que se desprende de las carpetas de los documentos aducidos por quienes resultaron favorecidos y que obran en el Anexo 2 de este expediente. Hecho que por demás se ve contradictorio en el dicho de los testimonios rendidos por MARIA ROSULA CRUZ RIAÑO (fls. 340-343) y audio fl. 447, VÍCTOR ÁNGEL CARDOZO PIRAGAUTA (fls. 344-345 c.o.), VÍCTOR DANILO MORALES SICUAMIA (fls. 345-346 c.o.), BERNARDO ROJAS TOCA (FLS. 346-348 c.o.), JUAN CARLOS FONSECA MORALES (fls. 348-350), ANDREA YAMILE CORREA CORREA (fls. 351-352 c.o.), JORGE NELSON CRUZ RIAÑO (fls. 353-355 c.o.), YULI ESPERANZA MENJUREN SUÁREZ (fl. 356), ANA VICTORIA OJEDA CEPEDA (fls. 357-358), MARTHA HERMINDA CHAPARRO LÓPEZ (fls. 358-359), ROSA TULIA CEPEDA*



*OJEDA (fls. 360-361 c.o.), LUIS MARCELO LÓPEZ CORREA (fls. 364-365) y MARÍA DE JESÚS MOGOLLÓN CORREA (fls. 361-362), quienes resultaron beneficiarios del subsidio adjudicado, pues cayeron en contradicciones al ser interrogados de la forma como se inscribieron, porque decían que a través de un formulario que fueron llenando los datos y a renglón seguido manifestaban que con una solicitud dejada en la alcaldía, de los cuales, tanto el formato, como la solicitud no obraba en sus carpetas y menos las de las otras personas que hicieron figurar como postulantes.*

*Así se descarta que la finalidad de la publicación del acto de adjudicación del otorgamiento del subsidio se haya dado con la fijación de la Resolución 040 de 2011 en la cartelera y por ello la configuración de la falta del primer cargo no se encuentra desvirtuada.*

*En relación con el segundo cargo la defensa en sus alegatos sostuvo que en esta actuación no aparece dentro del acervo probatorio prueba que demuestre que la intención del señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, en calidad de Alcalde de Cuitiva fue beneficiar a los señores JORGE NELSON CRUZ RIAÑO, JUAN CARLOS CARDOZO MORALES, VÍCTOR ÁNGEL CARDOZO PIRAGAUTA y FLOR ÁNGELA MACÍAS CORREA, con la adjudicación del subsidio de vivienda objeto de estudio, encontrando que obra una información sesgada por parte de los quejosos, quienes no conocieron del trámite y documentación aportada para ese evento.*

*Precisa que no es cierta la imputación del cargo reprochado porque de acuerdo con el decreto 40 del 12 de diciembre de 2012, emitido por el investigado, en el artículo 3° se señaló textualmente:*

*“La información falsa o fraudulenta soportada inhabilitará (sic) inhabilita la postulación y anula de manera absoluta el acto de otorgamiento particular del subsidio (...)”*

*Hecho con el cual considera la defensa que el investigado se blindó de toda responsabilidad sobre una información falsa o fraudulenta por parte de cualquiera de los beneficiarios y con lo cual demuestra que no tenía ningún interés en favorecer particularmente a alguien, motivo por el cual su actuar estuvo enmarcada dentro de los actos de buena fe exenta de culpa.*

*Sobre el particular el despacho no comparte las aseveraciones del defensor por cuanto el cargo endilgado se atribuye en la modalidad de culpa gravísima, en tanto el actuar del señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, se vislumbra descuidado y negligente para advertir que en el caso de los postulantes JORGE NELSON CRUZ RIAÑO (fl. 302), JUAN CARLOS CARDOZO MORALES, VÍCTOR ÁNGEL CARDOZO PIRAGAUTA (fl. 307) y FLOR ÁNGELA MACÍAS RIVERA (fl. 310), a dichas personas les*



*figuran propiedades tal como consta en la información contenida en el oficio SNR 2014 EE011490 del 14 de abril de 2014 (fl. 300 Anexo 1), a través del cual la Superintendencia Delegada para el Registro informó sobre la existencia de registro de propiedad de inmueble a su favor, lo cual indica que no podían ser beneficiarios del subsidio de vivienda otorgado por la Alcaldía de Cuitiva, acorde con las reglas establecidas en el Decreto 020 del 2 de mayo de 2011 (fls. 78-81 Anexo 1) y de manera especial el artículo 6° modificado por el artículo 1° de la ley 1432 de 2011, modificado por el artículo 28 de la ley 1469 de 2011 y artículo 7° de la ley 3 de 1991, en la medida en que no se acredita la condición de ser personas que carecían de recursos para obtener una vivienda. Hecho sobre el que el investigado tuvo acceso de manera directa en el proceso de la convocatoria, por cuanto fue él, quien realizó las evaluaciones y asignación de los puntajes de los postulantes (fls. 100 a 123 Anexo 2), tal como el mismo lo manifestó en su diligencia de versión libre (audio fl. 447).*

*De lo anterior, tal como se ha analizado, el actuar del investigado se ve realizado con la desatención elemental y violación de reglas de obligatorio cumplimiento, a la luz de lo que le correspondía vigilar y garantizar la finalidad y el cumplimiento de requisitos para otorgar los subsidios de vivienda promovidos en su condición de alcalde desde el año 2009 cuando se expidió el acuerdo que le permitía obtener los recursos destinados para ejecutar el programa que desarrolló en el año 2011, es decir que tuvo tiempo suficiente para planear, diseñar y ejecutar la convocatoria conforme a la ley, era conocedor de los reglamentos legales y sin embargo los desatendió. Más como el mismo lo expuso que dado a su condición y habitante de Cuitiva solía conocer la situación socio económica de los habitantes, pasando por alto que en el caso de los señores JORGE NELSON CRUZ RIAÑO (fl. 302), JUAN CARLOS CARDOZO MORALES, VÍCTOR ÁNGEL CARDOZO PIRAGAUTA (fl. 307) y FLOR ÁNGELA MACÍAS RIVERA, tenían la posibilidad de acceder a vivienda nueva por poseer recursos.*

*Dice que en cuanto al incremento patrimonial a favor de terceros señalado en el cargo, sin mencionar si fue justificado o no, lo que genera ambigüedad, si fuera injustificado no se allegó el debido informe técnico o dictamen pericial que soporte tal imputación, lo que da lugar a concluir que el cargo no puede prosperar por inexistencia del mismo.*

*Se apoya la defensa en el testimonio rendido por el señor JORGE ANDRÉS ALARCÓN AVELLA, actual alcalde del municipio de Cuitiva, quien afirmó que en su administración realizó la respectiva escrituración de los predios que se entregaron como subsidio de vivienda de interés social del proyecto denominado Urbanización Bochica, quien adujo que cuando recibió lo correspondiente a dicho proceso no advirtió ninguna irregularidad. Testimonio que en el sentir de la defensa desvirtúa el cargo.*



*Por otra parte refiere que es importante tener en cuenta que la administración de Cuitiva tuvo como soporte la información que reposaba en la base de datos del SISBEN, sobre la cual no tiene injerencia ningún mandatario local.*

*Estima la defensa que este despacho no cuenta con prueba que permita inferir con certeza que el investigado tenía conocimiento que los señores JORGE NELSON CRUZ RIAÑO, JUAN CARLOS CARDOZO MORALES, VÍCTOR ÁNGEL CARDOZO PIRAGAUTA y FLOR ÁNGELA MACIAS CORREA eran propietarios de vivienda durante el proceso de asignación del subsidio de vivienda de interés social del proyecto Urbanización Bochica, adelantado en el año 2011.*

*Sobre el incremento patrimonial no justificado trae a colación el fallo emitido el 22 de marzo de 2013 por la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública, dentro del IUC 079-03056, donde advierte que la carga de la prueba para dicha adecuación típica corresponde al Estado.*

*Finaliza los alegatos solicitando la absolución por que no se encuentran configurados los elementos que conforman la responsabilidad disciplinaria, además de la ausencia de la certeza de las faltas enrostradas en la pieza acusatoria, motivo por el cual no se cuenta con los requisitos del artículo 142 de la ley 734 de 2002 para proferir fallo sancionatorio.*

*Así las cosas de lo expuesto y las pruebas allegadas se concluye que no le asiste razón al defensor para desmaterializar la conducta plasmada en el segundo cargo endilgado a su mandante ante la imposibilidad de practicar en el término perentorio del presente proceso verbal, el concepto solicitado a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, respecto del incremento patrimonial no justificado a favor de terceros, por cuanto como se le explicó en la audiencia existen medios probatorios que acreditan que el subsidio de vivienda consistente en la entrega de casas a los cuestionados se dio, así como la tenencia de recursos por parte de los mismos. Es así que al otorgar un subsidio de vivienda de interés social a personas que tenían los medios para adquirir casa, vulnera la finalidad del subsidio y en consecuencia al otorgarlo, lo que hace es permitir que dichas personas incrementen su patrimonio injustificadamente, por tales razones no se accede a las alegaciones de la defensa.*

*Así mismo el libelista en su escrito hace ver su inconformidad respecto a la aprobación de copias solicitadas por los quejosos. Sobre el tópico este despacho toma en cuenta que el presente proceso se adelanta por el trámite de proceso verbal, por ende el auto de citación a audiencia hace las veces de la calificación del mérito de la investigación con la formulación del pliego de cargos, etapa a partir de*





*la cual cesa la reserva de la actuación disciplinaria. Conforme lo dispone el artículo 95 de la ley 734 de 2002.*

*Menciona igualmente que la funcionaria instructora en el presente asunto planteo unos interrogatorios a los testigos por fuera de la conducta reprochada en el auto de cargos, así como este procurador provincial (e) adujo en relación con la discusión que se planteó sobre la respuesta rendida por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales que lo referido en cuanto al tema de conveniencia, razonabilidad y necesidad del concepto respecto al incremento patrimonial injustificado a favor de terceros, era acatado por este despacho, habida cuenta la existencia de otros medios de prueba que demostraban lo solicitado y que para el caso los sujetos procesales tenían la oportunidad de objetar en el momento otorgado por la ley en este proceso verbal. Aspectos frente a los cuales la defensa censura que este despacho prejuzgó mostrando el ánimo de la decisión que correspondería en esta instancia, este operador disciplinario no comparte, porque lo debatido se dio en torno a la respuesta de una prueba solicitada por la misma defensa y la oportunidad de pronunciarse frente a la imposibilidad de su práctica obedecida por este despacho con fundamento en las razones analizadas, como se dijo.*

*Ahora bien, en lo que tiene que ver con la solicitud de traslado a la Procuraduría General de la Nación para que mediante una vigilancia especial, la veeduría establezca si se incurrió en alguna irregularidad por parte de la instructora en este proceso en el momento de realizar los interrogatorios, el despacho no advierte irregularidad al respecto, por cuanto en el curso de las investigaciones se trata de aclarar los hechos objeto de queja y los que resulten conexos conforme con el desarrollo de la actuación y en ese sentido las diferentes preguntas apuntaron a esa finalidad, por tanto no se accede al alegato de la defensa y se advierte que la misma tuvo oportunidad de intervenir en todas los testimonios y declaraciones recepcionadas, donde fueron tomados en cuenta sus constancias (audio fl. 447), así como inquiridos los investigados y la defensa al respeto a la sustracción de la dilación en las formas propias del procedimiento. Lo anterior sin perjuicio de insistir en lo pertinente, por parte de los interesados ante las instancias que correspondan.*

### **TIPICIDAD**

*En lo que tiene que ver con la tipicidad de la conducta encontrada como irregular, se establece que el investigado faltó a sus deberes al omitir dar cumplimiento a la ley para haber procedido a otorgar el subsidio de vivienda dentro del programa Urbanización Bochica, a quienes entre otros aspectos, carecieran de recursos para acceder al beneficio y en ese sentido transgredió las normas que le fueron citadas en el cargo endilgado, esto es el Decreto 020 del 2 de mayo de 2011 (fls. 78-81 Anexo 1)*



*y de manera especial el artículo 6° y 7° de la ley 3 de 1991<sup>26</sup>, modificado por el artículo 1° de la ley 1432 de 2011, modificado por el artículo 28 de la ley 1469 de 2011, en la medida en que no se acredita la condición de ser personas que carecían de recursos para obtener una vivienda, lo que configura una irregularidad constitutiva de falta disciplinaria a la luz del artículo 34 numeral 1 de la ley 734 de 2002, por el incumplimiento de la ley. En consecuencia, surge que al haber otorgado el subsidio de interés social a los señores JORGE NELSON CRUZ RIAÑO (fl. 302), JUAN CARLOS CARDOZO MORALES, VÍCTOR ÁNGEL CARDOZO PIRAGAUTA (fl. 307) y FLOR ÁNGELA MACÍAS RIVERA (fl. 310), a su vez el disciplinado incurrió en la conducta que permitió el incremento patrimonial no justificado a favor de terceros, previsto como falta disciplinaria en el artículo 48 numeral 3 de la ley 734 de 2002, inciso segundo que prevé: “Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, a favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga,”.*

*Lo anterior en la medida en que al beneficiar a los ciudadanos referidos, con el otorgamiento del subsidio de vivienda de interés social cuestionado, lo que se encuentra acreditado con la expedición de la Resolución 040 del 12 de diciembre de 2011, (fls. 86-88 Anexo 1), sin que dichas personas carecieran de recursos para adquirir vivienda, permitió que su patrimonio se incrementara injustificadamente con la vivienda adjudicada.*

*Se encuentra igualmente y de manera primigenia que el servidor público pudo faltar al artículo 209 de la Constitución Política, en la medida en que su actuar viola los principios de eficacia, transparencia y moralidad al desconocer sus deberes para actuar diligentemente en relación con las normas que rigen la materia para el otorgamiento de subsidios de vivienda.*

*Así mismo la conducta endilgada al mandatario local se encuentra establecida dentro del artículo 48 numeral 3, inciso segundo de la ley 734 de 2002 al prever: “Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, a favor*

---

<sup>26</sup> **Art. 6 de la ley 3 de 1991.** “Modificado por el art. 1, Ley 1432 de 2011, Modificado por el art. 28, Ley 1469 de 2011. Establécese el Subsidio Familiar de Vivienda como un aporte estatal en dinero o en especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece esta Ley”.

“La cuantía del subsidio será determinada por el Gobierno Nacional de acuerdo con los recursos disponibles, valor final de la solución de vivienda y las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios”.

**Artículo 7° de la ley 3 de 1991.** Podrán ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda los hogares de quienes se postulan para recibir el subsidio, por carecer de recursos suficientes para obtener una vivienda, mejorarla o habilitar legalmente los títulos de la misma; el reglamento establecerá las formas de comprobar tales circunstancias.

A las postulaciones aceptables se les definirá un orden secuencial para recibir la asignación del subsidio de acuerdo con las calificaciones de los aportes del beneficiario a la solución de vivienda, tales como ahorro previo, cuota inicial, materiales, trabajo o su vinculación a una organización popular de vivienda.



*propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga (...)"*

### **Concepto de la violación**

*Al disciplinado CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía 9398351, en su condición de alcalde de Cuitiva– Boyacá, le asistía el deber jurídico de actuar con diligencia y responsabilidad en los temas de su competencia y sobre los cuales dispuso llevar a cabo la convocatoria para los beneficiarios del subsidio de vivienda para la Urbanización Bochica, como programa de vivienda de interés social de la Alcaldía de Cuitiva, frente a lo cual se abstuvo de actuar en relación con los deberes que se estiman desconocidos así:*

*El ejercicio de la función pública comporta un vínculo especial de sujeción entre el servidor público y el Estado, por lo que éste, al tomar posesión del cargo, se compromete a cumplir y defender la Constitución y a desempeñar los deberes inherentes a su cargo; es por esto que no solo debe orientar su actuar al cumplimiento de los fines propios del Estado, sino que sobre éste se exige en mayor grado, un especial cuidado en el respeto de los derechos ajenos, sin perder de vista, que su ejercicio debe estar siempre en función de los intereses generales y acompañado de los principios básicos de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.*

*La Corte Constitucional en Sentencia C-252 de 2003, sobre el particular indicó:*

*"(...) Esto es entendible: La atribución de función pública genera un vínculo de sujeción entre el servidor público y el Estado y ese vínculo determina no solo el ámbito de maniobra de las autoridades con miras a la realización de los fines estatales, sino que también precisa el correlativo espacio de su responsabilidad, independientemente de la especificidad que en cada caso pueda asumir la potestad sancionadora del Estado.*

*Es por ello advirtió que cada servidor público debía tener claridad acerca de los criterios superiores con los que se vinculaba a la administración y de allí porque exigió, en el artículo 122, que sólo entre a ejercer su cargo después de prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Además, una vez satisfecha esa exigencia, debe tener siempre presente que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y que debe desarrollarse, según el artículo 209, con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.*



*Entonces, nótese cuál es el fundamento de la imputación disciplinaria: La necesidad de realizar los fines estatales, le impone un sentido al ejercicio de la función pública por las autoridades. Éstas deben cumplir la Constitución y la ley, ponerse al servicio de los intereses generales, desarrollar los principios de la función administrativa y desempeñar para ello los deberes que les incumben. Una actitud contraria de las autoridades lesiona tales deberes funcionales. Como estos deberes surgen del vínculo que conecta al servidor con el Estado y como su respeto constituye un medio para el ejercicio de los fines estatales orientados a la realización integral de la persona humana, es entendible que su infracción constituya el fundamento de la imputación inherente al derecho disciplinario. De allí que la antijuridicidad de la falta disciplinaria remita a la infracción sustancial del deber funcional a cargo del servidor público o del particular que cumple funciones públicas (...)" (subrayado fuera de texto)*

*Es así como el desconocimiento por parte de los servidores públicos de los deberes funcionales se encuentra regulado como falta en el Código único Disciplinario imponiendo sanciones a quienes con su actuar infringen sustancialmente sus deberes y afectan la función administrativa.*

*Se advierte que el disciplinado en principio con la manera como desarrolla la conducta reprochada, faltó disciplinariamente al mandato del artículo 34 numeral 1, al omitir dar cumplimiento a la ley para proceder al otorgamiento del beneficio de subsidio de vivienda de acuerdo con la finalidad de la misma, pues es claro que a los señores JORGE NELSON CRUZ RIAÑO, JUAN CARLOS CARDOZO MORALES, VÍCTOR ÁNGEL CARDOZO PIRAGAUTA y FLOR ÁNGELA MACÍAS RIVERA, les fue adjudicado el subsidio de vivienda, según el decreto 040 del 12 de diciembre de 2011, pese a que los mismos poseían títulos de propiedad a su nombre, lo que ponía en tela de juicio su carencia de recursos para adquirir vivienda (fl. 101 Anexo). A su vez al entregar el mencionado subsidio, dio lugar a incrementar el patrimonio de las referidas personas injustificadamente, de acuerdo con el artículo 48 numeral 3 de la ley 734 de 2002.*

### **ILICITUD SUSTANCIAL**

*El artículo 5 de la ley 734 de 2002, establece que la antijuridicidad de la falta disciplinaria se agota con la afectación sustancial del deber funcional sin justificación, sin que sea necesaria la existencia de un resultado lesivo.*

*La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-948 de 2002 expuso al respecto de la ilicitud sustancial "(...) obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que*



*se encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta. Así ha podido señalar esta Corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes funcionales que le incumben como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria. Dicho contenido sustancia remite precisamente a la inobservancia del deber funcional que por sí misma altera el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines (...)*”.

*Para el caso concreto se advierte que la conducta del Alcalde de Cuitiva, señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, implicó un abierto desconocimiento de su rol de servidor público, pues en su condición de representante del municipio de Cuitiva, inobservó su deber de actuar con diligencia y eficacia para el cumplimiento de la ley y los reglamentos en el tema de los subsidios de vivienda del programa Urbanización Bochica, lo que se le atribuye con una desatención elemental respecto de la vigilancia en el cumplimiento de requisitos, toda vez que en su condición de alcalde, a la vez participó en las evaluaciones y asignación de puntaje a los postulantes y sin embargo no se pronunció sobre el aspecto de carencia de recursos, pues si bien en el decreto 020 de 2011 de la alcaldía, fijó los requisitos mínimos para tener en cuenta de parte de los postulantes y allí se dijo entre tantos que no tuvieran vivienda, en todo caso la finalidad del subsidio es dirigirlo a la población más vulnerable en diferentes aspectos y el socio económico, precisamente consiste en dirigirlo a quienes tengan menos recursos.*

#### **Forma de culpabilidad y naturaleza de la falta**

*Según la doctrina, se entiende por culpabilidad o responsabilidad plena el juicio de exigibilidad en virtud del cual se le imputa al agente la realización de un injusto penal, (o ilícito disciplinario), pues dadas las condiciones de orden personal y social imperantes en el medio donde actúa se encuentran en posibilidad de dirigir su comportamiento acorde con los requerimientos del orden jurídico y no obra pudiendo hacerlo. Se trata entonces de un juicio de carácter eminentemente normativo fundado en la exigibilidad, idea que preside toda la concepción de la culpabilidad y en virtud de la cual el agente debe responder por su comportamiento, por no haber actuado conforme a la norma que determina el deber funcional.*

*De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la ley 734 de 2002, las faltas disciplinarias solo son sancionables a título de dolo o culpa, luego para que exista responsabilidad disciplinaria el comportamiento examinado, conforme a la modalidad de su realización, esto es, por acción o por omisión debe encuadrar en uno de tales presupuestos normativos.*



*En tal sentido la imputación subjetiva de la conducta endilgada al señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, se establece de manera definitiva en la modalidad de FALTA GRAVÍSIMA, por expresa disposición del artículo 48 numeral 3 de la ley 734 de 2002, a título de CULPA GRAVÍSIMA, en tanto incurrió en la violación del deber que le obligaba el cumplimiento de la ley en todo lo reglamentario para el otorgamiento del subsidio de vivienda, con acato a elevados postulados de los fines del Estado para satisfacer las necesidades de los asociados en el favorecimiento de vivienda de interés social, el que a la postre aparece infringiendo, con una desatención elemental para dirigir su conducta en aras a propiciar el beneficio aludido a personas que carecieran de recursos, garantizando el beneficio a la población más vulnerable y pese a ello aparece actuando evadiendo tales postulados, sin imprimir el cuidado necesario que le era exigible en su condición de alcalde de cuitiva y natural de dicho municipio, pues como lo adujo en su versión libre, en su condición de habitante y de alcalde de la localidad conocía de manera general a la población, de su forma de vida, su estado socio económico y aun así se abstuvo de actuar y percatar que varios de los postulados tenían recursos para adquirir vivienda, dirigiendo su actuar de una manera descuidada y negligente en relación con la adjudicación de los subsidios para adquirir vivienda de interés social del proyecto denominado Urbanización Bochica, en la época de marras.*

#### **DE LA SANCIÓN**

*De acuerdo con lo expuesto el despacho proferirá fallo sancionatorio en contra del señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía 9398351, en su condición de alcalde de Cuitiva– Boyacá, quien tomó posesión del cargo el 30 de diciembre de 2007, según acta de posesión ante la Notaría única del círculo de Pesca del 30 de diciembre de 2007 (fls. 43-45), para ejercer en el cargo de Alcalde Municipal para el período comprendido entre el año 2008 y el año 2011, al encontrar materializado los cargos formulados, en lo que tiene que ver con los actos de publicación de la adjudicación del subsidios de vivienda de interés social del proyecto Urbanización Bochica, según el Decreto 040 del 12 de diciembre de 2011 y la asignación de los subsidios a los ciudadanos JORGE NELSON CRUZ RIAÑO, JUAN CARLOS CARDOZO MORALES, VÍCTOR ÁNGEL CARDOZO PIRAGAUTA, FLOR ÁNGELA MACÍAS RIVERA Y MARIA EUGENIA LEMUS RODRÍGUEZ, llevado a cabo en la misma fecha.*

*En razón a que en la presente actuación se le atribuye al disciplinado la comisión de la infracción de varias disposiciones de la ley disciplinaria, lo que constituye un concurso ideal de faltas, dado que con varias acciones infringe tantos preceptos normativos, el despacho de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 numeral 2. literal a) de la ley 734 de 2002, aplicará sanción consistente en DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL por el término de ONCE (11) años, Partiendo del límite*



*mínimo establecido en el artículo 46 ibídem para el efecto. Teniendo en cuenta que la sanción más grave a imponer se deriva de la conducta endilgada a la luz del artículo 48 numeral 3° de la ley 734 de 2002, la cual conforme a lo dispuesto por el artículo 44 numeral 1 ibídem, por ser calificada de manera definitiva como GRAVÍSIMA, a título de CULPA GRAVÍSIMA, la clase de sanción disciplinaria que le corresponde es la de DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL, la que se incrementa por el concurso de faltas”.*

En relación a la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, en su condición de Secretaria de Hacienda y miembro del Comité de Vivienda de la Alcaldía de Cuitiva – Boyacá, la Procuraduría Provincial de Sogamoso indicó en su decisión:

*“(…) En lo que respecta a la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía 1051522053, en su condición de Secretaria de Hacienda del municipio de Cuitiva– Boyacá (fls. 83, 92, 96-97), de acuerdo con el cago formulado consistente en que para el 13 de junio de 2011 intervino como miembro del Comité de Vivienda del municipio de Cuitiva, creado para adelantar los trámites pertinentes con la convocatoria de la Urbanización Bochica, como programa de vivienda de interés social de la Alcaldía de Cuitiva, presuntamente sin que se pronunciara respecto del interés que le asistía para que el postulante ROVIN HELVER VARGAS PEDRAZA, identificado con la cédula de ciudadanía 1057574745, saliera favorecido, en la medida en que dicho señor era el progenitor de su hija NICCOL ESTEFANI VARGAS. Persona que fue evaluado, seleccionado y beneficiado para otorgarle el subsidio, según el decreto 040 del 12 de diciembre de 2011. Conducta con la cual pudo transgredir el deber que le implicaba el cumplimiento de la ley a la luz del artículo 34 numeral 1 de la ley 734 de 2002, en la medida en que omitió declararse impedida para participar en el Comité de Vivienda del municipio de Cuitiva para el año 2011, dado su posible particular interés para favorecer al padre de su descendiente y, a la vez actuó en la gestión del trámite de dicha convocatoria, pese al conflicto de intereses en el que se encontraba.*

*Se tiene, que la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA y el señor ROVIN HELVER VARGAS PEDRAZA, éste último beneficiario del programa, ambos eran padres de la menor NICCOL ESTEFANI VARGAS RAMOS, pues así se demuestra con el registro civil de nacimiento de la menor visible a folio 124 c.o. y de acuerdo con lo expuesto por la investigada en su versión (fls. 194-195 c.o. ) y audio fl. 447.*

*Figura en el plenario que la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA intervino en el proceso de la convocatoria objeto de estudio, en su condición de Secretaria de Hacienda y miembro del comité de vivienda creado para la convocatoria que tenía como finalidad otorgar subsidios de vivienda de interés social para el proyecto denominado Urbanización Bochica, adelantado en el año 2011 por la Alcaldía de*



*Cuitiva. Así se demuestra con el acto por medio del cual se fija en la alcaldía municipal el listado de los inscritos como hogares interesados en participar en la convocatoria para acceder a un subsidio de vivienda cuya publicación se dio el 13 de junio de 2013 (fls. 101-102 Anexo) y en tal publicación aparece fijado el nombre del señor ROVIN HELVER VARGAS PEDRAZA, identificado con cédula de ciudadanía 1057574745, como uno de los postulantes. Listado que por demás aparece firmado por la investigada al hacer parte del Comité de vivienda, en el mismo sentido la constancia de la publicación de la Resolución 048 del 25 de noviembre de 2011, a través de la cual se fija el listado de los beneficiarios seleccionados en el tema objeto de estudio, donde igualmente figura la investigada suscribiendo dicho acto, en el que además fue beneficiado el señor VARGAS PEDRAZA, las calificaciones otorgadas a los postulantes (fls. 103-123) y el registro civil de nacimiento de la niña NICCOL ESTAFANI VARGAS hija de MIRZA YANETH RAMOS CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía 1051522053 y ROVIN HELVER VARGAS PEDRAZA, identificado con la cédula de ciudadanía 1057574745, documento con el cual se acredita el posible interés en actuar en el proceso de la convocatoria para en ese mismo sentido velar por el favorecimiento del padre de su hija (fl. 124).*

*Así mismo el despacho llama la atención que de antemano la investigada conocía cuáles eran los requisitos para postularse como interesado en la convocatoria aludida y sabía de qué manera se asignarían los puntajes en los factores de evaluación. Ello se demuestra del anexo que hizo parte del Decreto 020 del 2 de mayo de 2011, por medio del cual se dictaron las normas para llevar a cabo la convocatoria de la Urbanización Bochica, en cuyo documento visible a folios 82 a 83 del Anexo 1, así como 9 a 10 del Anexo 2, fue definida la tabla de calificación y evaluación habilitante para acceder al subsidio, formato que figura firmado por la investigada en su condición de miembro del comité de vivienda y Secretaria de Hacienda de la Alcaldía de Cuitiva para la época de los hechos.*

*El interés de actuar en favorecimiento del padre de su hija por parte de la investigada, este despacho lo encuentra evidente en la etapa de juicio, en la medida en que con los requisitos adjuntados por el señor ROVIN HELVER VARGAS PEDRAZA, identificado con la cédula de ciudadanía 1057574745, dentro de su carpeta contentiva de la aducción de los requisitos para ser beneficiario del subsidio, allegó declaración extrajuicio (fl. 187 Anexo 2) en la que declara que era padre cabeza de familia y su núcleo familiar era compuesto por él y la menor NICCOL ESTAFANI VARGAS RAMOS. Lo que no era cierto, en tanto la propia investigada afirmó que ella era la madre de la menor mencionada y en esa época ejercía como Secretaria de hacienda, devengando salario, de lo que se sustrae la fuente del sustento de la menor, entre otros aspectos.*





*En conclusión este despacho no encuentra desvirtuado el cargo formulado.*

#### **ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

*El 23 de septiembre de 2015, mediante diligencia de audiencia pública, la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA (fls. 189-198) audio (fl. 447), mediante diligencia de audiencia pública manifestó en su versión que en su condición de Secretaria de Hacienda de la alcaldía de Cuitiva para la época de los hechos participó, en el proceso de la convocatoria para asignación de subsidios de vivienda en el proyecto de vivienda de interés social objeto de estudio, en lo que tuvo que ver con la publicación del listado de los postulados, lo que se dio el 13 de junio de 2011 y en la tabla de los criterios que se iban a tener en cuenta en la evaluación de los proponentes, la cual era un anexo al Decreto que contenía las normas de la convocatoria.*

*Sostuvo que una vez publicado el listado de los postulados a ser beneficiarios del subsidio, verbalmente se declaró impedida ante el Secretario de Gobierno de la época y por tal razón su nombre ni su firma siguió figurando en los siguientes trámites de la gestión en tal proceso, lo que se prueba con las firmas que aparecen en los formatos de evaluación y demás, aunque si aparece su firma en el acta de entrega de los subsidios en diciembre de 2011, pero, destaca que esa ya era una decisión tomada por fuera de su intervención.*

*Frente a los descargos el despacho no encontró demostrado que la investigada se declarara impedida como lo adujo, pues su dicho fue desvirtuado por el propio Secretario de Gobierno para la época, el señor KAROL RICARDO RAMÍREZ SILVA, según su declaración rendida el 27 de octubre de 2015 (fls. 416-420) y audio fl. 447., quien sostuvo que nunca tuvo un pronunciamiento al respecto ni advertencia de parte de la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA.*

*El 24 de noviembre de 2015 la investigada MIRZA YANETH RAMOS CORREA, en diligencia de audiencia hizo entrega por escrito de sus alegatos de conclusión, de lo cual, igualmente realizó lectura (fls. 448-469). En términos generales planteó:*

*La señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA adujo que en relación con el cargo endilgado, una vez advirtió que el señor ROVIN HELVER VARGAS PEDRAZA, padre de su hija NICCOL ESTEFANI VARGAS figuraba como postulado en la convocatoria objeto de estudio, se sustrajo de intervenir en dicho trámite, en su condición de Secretaria de Hacienda de la alcaldía de Cuitiva.*



*Dice que prueba de su alegato es que en los actos de evaluación y asignación de subsidios no figura su firma y sostiene su argumento en la declaración rendida por el Personero de Cuitiva de la época, el Dr. MARIO HERNANDO JAIMES y de igual forma por el Secretario de Gobierno KAROL RICARDO RAMÍREZ SILVA, quien manifestó que el proceso de evaluación selección de los beneficiarios del subsidio fue realizado únicamente por él, sin que ella tuviera alguna participación al respecto. Lo que igualmente se deduce del testimonio de los beneficiarios del subsidio de vivienda, de donde se desprende que en ningún momento recibió documentos ni estuvo presente en las reuniones o en el proceso de selección de los mismos.*

*Alega que con las pruebas documentales y testimoniales recaudadas en esta actuación disciplinaria se llega a la certeza de que no incurrió en ninguna irregularidad con alcance disciplinario dejando desvirtuado las conductas incongruentes que le fueron imputadas en el cargo, por consiguiente solicita la absolucón disciplinaria.*

*Al respecto el despacho encuentra corroborado lo afirmado por la investigada al señalar que su firma no figura en los formularios de calificación y evaluación de los beneficiarios ni tampoco en el acto de adjudicación. No obstante, como se ha demostrado, el señor ROVIN HELVER VARGAS PEDRAZA, para la época de los hechos no cumplía con uno de los requisitos para ser beneficiario, cual era que su núcleo familiar estuviera conformado por 2 o más personas y al respecto adujo la declaración extrajuicio indicando que era cabeza de familia por ser el padre de la menor NICOL ESTEFANY quien vivía con él, lo cual fue desvirtuado por la propia investigada, quien en su versión sostuvo que su convivencia con el señor inició hace aproximadamente 2 años y ella era la madre de la niña NICOL.*

*Hecho relevante para este despacho, por cuanto como se analizó anteriormente, la investigada conocía de antemano la manera como se calificarían los requisitos y sorprendentemente el padre de su hija aparece actuando para ser beneficiario, haciéndose pasar como padre cabeza de familia.*

*Por otro lado en el presente asunto no se cuestiona que la investigada haya participado únicamente en el acto de adjudicación del subsidio, sino en la convocatoria, en la cual no se declaró impedida para actuar conforme se demuestra.*

## **TIPICIDAD**

### **Normas presuntamente violadas**

*Con la conducta anterior se le endilga a la servidora pública que faltó a sus deberes implícitos en el artículo 34 numeral 1, en la medida en que en ejercicio de su cargo*



*como Secretaria de Hacienda del municipio de Cuitiva, hizo parte del Comité de Vivienda para el año 2011, participó en la convocatoria para ejecutar el programa de vivienda de interés social en la Urbanización Bochica, en cuyo trámite uno de los postulantes era el padre de su hija, quien resultó favorecido para que se le otorgara el subsidio de vivienda, desconociendo que le asistía el deber de declararse impedida a la luz del artículo 40 de la ley 734 de 2002<sup>27</sup>. Desconocimiento de tal obligación que la deja incurso en la falta prevista en el artículo 48 numeral 17 Ibídem<sup>28</sup>, por haber actuado en los trámites y etapas de la convocatoria mencionada, a pesar del conflicto de intereses frente al postulado ROVIN HELVER VARGAS PEDRAZA, identificado con la cédula de ciudadanía 1057574745.*

*Se encuentra igualmente y de manera primigenia que la servidora faltó al artículo 209 de la Constitución Política, en la medida en que su actuar viola los principios de eficacia, moralidad e imparcialidad, al omitir declararse impedida en la gestión que adelantó como miembro del Comité de vivienda del municipio de Cuitiva, con el objeto de calificar y seleccionar a los beneficiarios del subsidio de vivienda, toda vez que lo que se protege aquí es que la actuación sea transparente frente a los asociados.*

### **Concepto de la violación**

*A la disciplinada MIRZA YANETH RAMOS CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía 1051522053, en su condición de Secretaria de Hacienda de Cuitiva–Boyacá, le asistía el deber jurídico de actuar de acuerdo con sus deberes, acatando las obligaciones impuestas por la ley. Su actuación para intervenir en un proceso de favorecimiento para otorgar subsidios a quienes resultaran favorecidos en la convocatoria para la Urbanización Bochica de la alcaldía de Cuitiva, como programa de vivienda de interés social, aparece desconsiderada frente a la comunidad, al abstenerse de actuar en dicho asunto, en la medida en que uno de los postulantes era el progenitor de su hija NICCOL ESTAFANY VARGAS, lo que en principio genera un conflicto de intereses, dado su posible ánimo de favorecerlo, actuación que la puede dejar incurso en la violación de los deberes que se estiman desconocidos así:*

*El ejercicio de la función pública comporta un vínculo especial de sujeción entre el servidor público y el Estado, por lo que éste, al tomar posesión del cargo, se compromete a cumplir y defender la Constitución y a desempeñar los deberes*

---

<sup>27</sup> **Art. 40 de la ley 734 de 2002.** Conflicto de intereses. “Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión (...).”

<sup>28</sup> **Art. 48 numeral 17 de la ley 734 de 2002.** Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas: “17. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las con las previsiones constitucionales y legales (...).”



*inherentes a su cargo; es por esto que no solo debe orientar su actuar al cumplimiento de los fines propios del Estado, sino que sobre éste se exige en mayor grado, un especial cuidado en el respeto de los derechos ajenos, sin perder de vista, que su ejercicio debe estar siempre en función de los intereses generales y acompañado de los principios básicos de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.*

*La Corte Constitucional en Sentencia C-252 de 2003, sobre el particular indicó:*

*“(...) Esto es entendible: La atribución de función pública genera un vínculo de sujeción entre el servidor público y el Estado y ese vínculo determina no solo el ámbito de maniobra de las autoridades con miras a la realización de los fines estatales, sino que también precisa el correlativo espacio de su responsabilidad, independientemente de la especificidad que en cada caso pueda asumir la potestad sancionadora del Estado.*

*Es por ello advirtió que cada servidor público debía tener claridad acerca de los criterios superiores con los que se vinculaba a la administración y de allí porque exigió, en el artículo 122, que sólo entre a ejercer su cargo después de prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Además, una vez satisfecha esa exigencia, debe tener siempre presente que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y que debe desarrollarse, según el artículo 209, con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.*

*Entonces, nótese cuál es el fundamento de la imputación disciplinaria: La necesidad de realizar los fines estatales, le impone un sentido al ejercicio de la función pública por las autoridades. Éstas deben cumplir la Constitución y la ley, ponerse al servicio de los intereses generales, desarrollar los principios de la función administrativa y desempeñar para ello los deberes que les incumben. Una actitud contraria de las autoridades lesiona tales deberes funcionales. Como estos deberes surgen del vínculo que conecta al servidor con el Estado y como su respeto constituye un medio para el ejercicio de los fines estatales orientados a la realización integral de la persona humana, es entendible que su infracción constituya el fundamento de la imputación inherente al derecho disciplinario. De allí que la antijuridicidad de la falta disciplinaria remita a la infracción sustancial del deber funcional a cargo del servidor público o del particular que cumple funciones públicas (...)*”

*Es así como el desconocimiento por parte de los servidores públicos de los deberes funcionales se encuentra regulado como falta en el Código único Disciplinario imponiendo sanciones a quienes con su actuar infringen sustancialmente sus deberes y afectan la función administrativa.*



*Se advierte que la disciplinada faltó disciplinariamente al mandato del artículo 34 numeral 1, al omitir declararse impedida, por mandato del artículo 40 ibídem.*

### **ILICITUD SUSTANCIAL**

*El artículo 5 de la ley 734 de 2002, establece que la antijuridicidad de la falta disciplinaria se agota con la afectación sustancial del deber funcional sin justificación, sin que sea necesaria la existencia de un resultado lesivo.*

*La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-948 de 2002 expuso al respecto de la ilicitud sustancial “(...) obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta. Así ha podido señalar esta Corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes funcionales que le incumben como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria. Dicho contenido sustancia remite precisamente a la inobservancia del deber funcional que por sí misma altera el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines (...)”.*

*Para el caso concreto se advierte que la conducta de la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía 1051522053, implicó un abierto desconocimiento de su rol de servidora pública, pues en su condición de Secretaria de Hacienda, tuvo intervención directa en el proceso objeto de estudio e inobservó su deber de acatar la ley para declararse impedida en la actuación que le correspondió frente el tema de los subsidios de vivienda del programa Urbanización Bochica, lo que se le atribuye con la intención de realizarlo, toda vez que en su condición, advirtió que el señor ROVIN HELVER VARGAS PEDRAZA, identificado con cédula de ciudadanía 1057574745, era uno de los postulantes para acceder al beneficio, quien al ser el padre de su hija, al resultar beneficiado, a la vez le generaba un beneficio a su hija. Ahí el interés y el conflicto en el que aparece implicada.*

### **Forma de culpabilidad y naturaleza de la falta**

*Según la doctrina, se entiende por culpabilidad o responsabilidad plena el juicio de exigibilidad en virtud del cual se le imputa al agente la realización de un injusto penal, (o ilícito disciplinario), pues dadas las condiciones de orden personal y social*



*imperantes en el medio donde actúa se encuentran en posibilidad de dirigir su comportamiento acorde con los requerimientos del orden jurídico y no obra pudiendo hacerlo. Se trata entonces de un juicio de carácter eminentemente normativo fundado en la exigibilidad, idea que preside toda la concepción de la culpabilidad y en virtud de la cual el agente debe responder por su comportamiento, por no haber actuado conforme a la norma que determina el deber funcional.*

*De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la ley 734 de 2002, las faltas disciplinarias solo son sancionables a título de dolo o culpa, luego para que exista responsabilidad disciplinaria el comportamiento examinado, conforme a la modalidad de su realización, esto es, por acción o por omisión debe encuadrar en uno de tales presupuestos normativos.*

*En tal sentido la imputación subjetiva de la conducta endilgada a la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, se establece en forma definitiva en la modalidad de FALTA GRAVÍSIMA, por expresa descripción de la falta determinada en el artículo 48 numeral 17 de la ley 734 de 2002, la cual, de la manera como se desarrollan los hechos se advierte a título de DOLO, en tanto incurrió en la violación del deber que le obligaba el cumplimiento de la ley, el que a la postre aparece infringiendo, pese a que era evidente que el padre de su hija era un postulante de la convocatoria de vivienda de interés social, en la que la servidora participaba en su condición de Secretaria de Hacienda de Cuitiva y miembro del Comité de Vivienda constituido para el efecto, no obstante omitió declararse impedida y decidió seguir participando en dicha actuación, acompañando el proceso de asignación de las casas, como lo expuso la propia disciplinada a sabiendas de estar incurso en un conflicto de intereses. En la condición ejercida para la época de los hechos conocía cuáles eran las reglas de juego para la convocatoria, conoció que el padre de su hija era postulado y conocía de qué manera se debían acreditar los requisitos. Frente a los cuales el señor ROVIN HELVER VARGAS PEDRAZA hizo parecer su núcleo familiar como cabeza de familia por ser padre de la menor que a la vez era hija de la investigada. Hecho con el que se demuestra la intención de favorecerse mutuamente.*

#### **DE LA SANCIÓN**

*De acuerdo con lo expuesto el despacho proferirá fallo sancionatorio en contra de la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía 1051522053, en su condición de Secretaria de Hacienda de Cuitiva– Boyacá, al encontrar materializado y no desvirtuado el cargo formulado en relación con su intervención en la gestión de la convocatoria adelantada en el año 2011 por el municipio de Cuitiva para la asignación de subsidios de vivienda de interés social del proyecto Urbanización Bochica, sin que se declarara impedida ante la intervención*



*en dicho proceso por parte del padre de su menor hija, quien resultó favorecido.*

*De acuerdo con la calificación definitiva de la falta en la modalidad de falta gravísima por disposición expresa del artículo 48 numeral 17 de la ley 734 de 2002 y a título de dolo, la sanción que se aplica es la de DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL por el término de DIEZ (10) años, Partiendo del límite mínimo establecido en el artículo 46 ibídem para el efecto. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 44 numeral 1 ibídem”.*

En este punto, el A-quo advierte:

*“(…) no puede pasar inadvertido que en el curso de la investigación surgió del testimonio rendido por las señoras ROSA TULIA CEPEDA OJEDA (fls. 360-361 c.o.) y MARÍA DE JESÚS MOGOLLÓN CORREA (fls. 361-362 c.o.) que en su condición de postulantes y beneficiarias del subsidio, tuvieron que aportar la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000), de lo cual hicieron entrega a funcionarios en la alcaldía de Cuitiva, pero no sabían precisar los nombres. Suma que no aparece fijada en las reglas de la convocatoria, pero que se demuestra que los beneficiarios tuvieron que pagar, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula tercera de las escrituras públicas elevadas por la administración municipal de Cuitiva (fls. 364 a 386 Anexo 2), para el acto de adjudicación del dominio de las casas que fueron entregadas como parte del subsidio de vivienda de interés social del proyecto Urbanización Bochica, llevado a cabo en el año 2011 por la alcaldía de Cuitiva. Dinero que con el acervo probatorio recopilado en este expediente no aparece ingresado a las arcas de la alcaldía, de acuerdo con los antecedentes y ejecución de la convocatoria surtida a través del Decreto 020 de 2011. Hecho que puede constituir conductas susceptibles de la jurisdicción penal y de carácter disciplinario, en razón de lo cual se compulsará copia de esta determinación a la oficina correspondiente de la Fiscalía General de la Nación y a este despacho disciplinario para los fines que se estimen pertinentes”.*

Realizada la amplia exposición de motivos por los cuales el A-quo procede a determinar decisión de fondo, la Procuraduría Provincial de Sogamoso resolvió:

*“(…) PRIMERO: DECLARAR PROBADOS y NO DESVIRTUADOS LOS CARGOS FORMULADOS al señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía 9398351, en su condición de Alcalde de Cuitiva– Boyacá y a la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía 1051522053, en su condición de Secretaria de Hacienda y miembro del Comité de vivienda de la alcaldía de Cuitiva– Boyacá para el período comprendido entre mayo y diciembre de 2011, conforme se ha expuesto en la parte motiva de esta determinación, por los hechos relacionados con la gestión, manejo y adjudicación de*



*los subsidios de familia de la convocatoria para el programa de interés social denominado Urbanización Bochica, materializado el 12 de diciembre de 2011.*

**SEGUNDO:** *PROFERIR FALLO SANCIONATORIO DISCIPLINARIO en contra del señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía 9398351, en su condición de Alcalde de Cuitiva– Boyacá y en consecuencia se le impone sanción disciplinaria consistente en DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL por el término de ONCE (11) años, de acuerdo con la calificación definitiva de la falta en la modalidad de FALTA GRAVÍSIMA a título de CULPA GRAVÍSIMA, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 numeral 2. literal a) de la ley 734 de 2002, partiendo del límite mínimo establecido en el artículo 46 ibídem para el efecto. Teniendo en cuenta que la sanción más grave a imponer se deriva de la conducta endilgada a la luz del artículo 48 numeral 3° de la ley 734 de 2002, y conforme a lo dispuesto por el artículo 44 numeral 1 ibídem.*

**TERCERO:** *PROFERIR FALLO SANCIONATORIO DISCIPLINARIO en contra de la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía 1051522053, en su condición de Secretaria de Hacienda y miembro del comité de vivienda de la Alcaldía de Cuitiva y en consecuencia se le impone sanción disciplinaria consistente en DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL por el término de DIEZ AÑOS, de acuerdo con la calificación definitiva de la falta como FALTA GRAVÍSIMA, a título de DOLO y conforme a lo previsto en el artículo 48 numeral 17 de la ley 734 de 2002, partiendo del límite mínimo establecido en el artículo 46 ibídem para el efecto y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 44 numeral 1 ibídem.*

**CUARTO:** *COMPULSAR copia de la presente determinación a la Fiscalía general de la Nación, oficina competente y a este despacho disciplinario para lo relacionado con el aporte de la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000), dentro del proceso analizado sin que al parecer aparezca ingresada a la alcaldía, conforme se expuso en la parte motiva de esta decisión.*

**QUINTO:** *La presente decisión es notificada EN ESTRADOS a los sujetos procesales, y solo procede en su contra el RECURSO DE APELACIÓN, de conformidad con el artículo 180 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 5929 de la Ley 1474 de 2011, por lo que deberá interponerse y sustentarse dentro de la misma diligencia so pena de declararse desierto, tras lo cual se concederá en el efecto suspensivo, para que sea resuelto por la Procuraduría Regional de Boyacá”.*

---

<sup>29</sup> “(...) El recurso de apelación cabe contra el auto que niega pruebas, contra el que rechaza la recusación y contra el fallo de primera instancia, debe sustentarse verbalmente en la misma audiencia, una vez proferido y notificado el fallo en estrados. Inmediatamente se decidirá sobre su otorgamiento. (...)” Inciso declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-315 de 2012.





### **Recurso de Apelación.**

Una vez pronunciado el fallo por parte de la Procuraduría Provincial de Sogamoso, dentro de Audiencia Pública desarrollada el día 26 de noviembre de 2015<sup>30</sup>, la decisión es notificada en estrados a los disciplinados quienes al dárseles la palabra por parte del Despacho de Primera Instancia, en relación al señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS se dijo:

*“(...) Por parte de la defensa. Presento recurso de apelación. Solicito a la segunda instancia. Se revise la totalidad del escrito de alegatos (...). Este despacho hace un análisis completo del trámite y no hay congruencia del cargo imputado con lo motivado en el fallo (...) se habla de utilización de perifoneo para la publicidad de los atos, de emisora cuando eso no fue cuestionado (...) no entiende como el despacho desestima el dicho de 20 testigos, no se puede considerar que son sospechosos (...)”*

*Dice que se da certeza cuando hizo el interrogatorio que los hechos analizados no corresponden a lo investigado (...)*

*En relación al segundo (...), el despacho hace referencia al aporte de documento que acreditaban la existencia de propiedades por parte de unos beneficiarios, los cuales no fueron aportados en la convocatoria, sino que aparecen después, por tanto el alcalde actuó de buena fe, él no tenía conocimiento de esas situaciones. El despacho no acredita ese conocimiento (...).*

*Considero que esa apreciación debe ser analizada en la segunda instancia (...), dice que la evaluación de la documentación allegada arrojó que los postulados resultaban beneficiarios y así se hizo conforme a la documentación aportada. Si no existía en la convocatoria información que permitía inferir la existencia de propiedades en cabeza de los beneficiarios. (...).*

*La defensa considera que no está la certeza de la falta indilgada y tampoco se podía tipificar la conducta como se hizo, por tanto se debe evaluar minuciosamente todas las pruebas por parte de la segunda instancia. Considera desproporcionada la sanción aplicada, si se trata de haber utilizado el perifoneo”.*

---

<sup>30</sup> Folios 519 a 520



Una vez terminada la intervención de la defensa del señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, toma la palabra la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, quien manifiesta:

*“(...) interpone recurso de apelación y solicita se revise todo el proceso (...). Dice que no participó en la recopilación de documentos por parte de su hija y si él cumplió, eso era aparte de su voluntad y conocimiento. Adujo que ella (...) no sabía si el padre de su hijo se iba a presentar en la convocatoria”.*

### **Actuaciones en Segunda Instancia.**

Con fecha 15 de marzo de 2016, mediante Auto N° 002<sup>31</sup>, esta Procuraduría Regional procedió a tomar decisión en torno al caso puesto a consideración, resolviendo en el mismo confirmar la decisión de la Primera Instancia, en relación al proceso identificado con el N° ISU-2015-231032 / IUC-2015-571-779836.

En cumplimiento del trámite respectivo, y realizando una última evaluación previa a ser enviado el expediente al despacho de origen, la Procuraduría Regional de Boyacá advierte, que en el procedimiento efectuado en Segunda Instancia, se omitió dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 8° - Artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, por medio del cual fue modificado el Artículo 180 de la Ley 734 de 2002; por tanto en cumplimiento del debido proceso, mediante Auto N° 650 de fecha 31 de marzo de 2016<sup>32</sup>, se resuelve *“(...) Decretar Oficiosamente la **NULIDAD** de la actuación a partir de la providencia de marzo 15 de 2016”*, procediendo a dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 8° - Artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, por medio del cual fue modificado el Artículo 180 de la Ley 734 de 2002, procediendo mediante oficio N° 857 y 858 del 18 de abril de 2016<sup>33</sup>, a correr traslado del expediente a los disciplinados señor CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS y la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, advirtiéndolos a los mismos el término que les acoge con tal fin, una vez desfijado del estado en el cual es incluido el Auto en cuestión.

Mediante escritor radicado con fecha 20 de abril de 2016<sup>34</sup>, el señor CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS, solicita al despacho *“(...) suspender el termino de traslado para alegar de conclusión”*, argumentando el no contar con la asistencia legal del caso.

Con fecha 20 de abril de 2016, mediante Auto N° 866<sup>35</sup>, la Procuraduría Regional resuelve la petición presentada por el señor CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS, en donde se decide negar lo solicitado por el disciplinado, toda vez que

---

<sup>31</sup> Folios 544ª 561

<sup>32</sup> Folios 563 a 562

<sup>33</sup> Folios 569 a 570

<sup>34</sup> Folio 573

<sup>35</sup> Folio 574



dicha petición *“(...) no es procedente como quiera que el termino establecido (...) es un término legal no susceptible de suspensión”*.

Mediante escrito radicado ante la Procuraduría Regional de Boyacá con fecha 22 de abril de 2016, el doctor HECTOR EFRAIN ORJUELA GARCIA, una vez cumplidas las formalidades de Ley, presenta *“(...) alegatos que sustentan el recurso de apelación”*, en el cual manifiesta la existencia de defecto sustantivo por la falta de congruencia entre los hechos y actos referidos y las disposiciones normativas invocadas como sustento; afirmando, la existencia de error en el señalamiento de la Resolución mediante la cual fueron adjudicados los subsidio de vivienda motivo de las diligencias, pero reconociendo que dicho evento es corregido por el despacho de Primera Instancia. Asegura el exponente entonces, que el cargo imputado carece de sustento legal, puesto que frente al decreto 040 del 12 de diciembre de 2011 no existe reproche. En este aspecto encuentra el Despacho, que no cabe razón al doctor HECTOR EFRAIN ORJUELA, toda vez que como se dijo, en su propia exposición a folio 581 del expediente actual, el A-quo *“(...) de manera reiterada admitió”* y/o corrigió tal error, dando la dirección adecuada a la actuación y por tanto dejando aclarado el yerro.

Como segundo motivo del recurso, el doctor HECTOR EFRAIN ORJUELA asegura la existencia de un responsabilidad objetiva, toda vez que según él, *“(...) jamás podrá concluirse”* la responsabilidad de su poderdante en relación a la obligación de publicación a que refiere el proceso; toda vez que no existe dentro del proceso documento que refleje el manual de funciones y competencias de los empleados de la Alcaldía Municipal de Cuitiva, vigente para el momento de los hechos, que permita determinar sobre que servidor público recaía la obligación de cumplir con la publicación. En este punto, puede este Despacho señalar, que la defensa olvida no toma en cuenta que el mismo señor CARLOS HERNANDO LOPEZ, dentro las intervenciones realizadas en el plenario, aseguró que asumió el proceso y/o la responsabilidad en forma personal en relación a la adjudicación de los subsidios de vivienda; más aún, no se tiene en cuenta, que si bien, puede existir responsabilidad en uno u otro funcionario en relación a la función administrativa de girar los documentos necesarios para lograr la publicación a que se refiere el proceso, dicha responsabilidad no es la base de la acusación y decisión tomada en primera instancia, sino que la misma se encuentra dirigida al deber funcional de control y verificación que debía ejercer el burgomaestre sobre los eventos cumplidos dentro de la administración por el dirigida y sumado a ello, el reconocimiento por el mismo señor CARLOS HERNANDO LOPEZ, de que asumió de forma personal lo relacionado con tal adjudicación.



Como tercer punto del recurso, se encuentra la supuesta violación del Principio de Legalidad por parte de la Primera Instancia, toda vez que el comportamiento del disciplinado supuestamente no desconoció ninguna disposición legal y en particular lo relacionado con el numeral 1° Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, ya que no le asistía deber en publicar la lista de beneficiarios de los subsidios motivo de diligencia; insistiendo en su argumentación sobre la Resolución 048 del 25 de noviembre de 2011.

Como nuevo punto, se asegura la existencia de violación al Principio de la Buena Fe dentro de la actuación disciplinaria, toda vez que dicho principio fue observado por su poderdante, cuando este estableció mediante acto administrativo los requisitos y procedimientos que se tendrían en cuenta dentro de la convocatoria realizada, siendo su papel como administración municipal el *“(...) recepcionar las solicitudes de postulación y revisar que mediante los documentos que aporten cumplan con los requisitos establecidos”*. Considera el doctor HECTOR EFRAIN ORJUELA, que los documentos aportados por los particulares que resultaron beneficiarios de los subsidios a que refiere las diligencias, en razón al Principio de buena fe, se les debe creer y tener como cierto todo lo que allí se afirme, sin mayor análisis por parte de la administración, ya que si posteriormente se advierte la existencia de anomalías en tales documentos, la decisión tomada podría ser motivo de revocatoria y reintegro de los dineros mediante la respectiva orden. Se afirma que en la imputación de cargos se da por descontada la mala fe de la administración al beneficiar a quienes no tenían derecho y se observa que las pruebas que dieron lugar a la identificación de posibles beneficiarios que no tenían derecho al subsidio de vivienda, *“(...) **surgieron y fueron conocidas mucho tiempo después de producida la adjudicación**”*, no siendo el señor CARLOS HERNANDO LOPEZ quien escrituró los inmuebles que a la postre constituyen el subsidio. Se advierte el registro SISBEN como antecedente que permite amparar la presunción de legalidad de los datos para acceder al subsidio, hecho por el cual *“(...) los funcionarios que realizaron la evaluación para la selección de beneficiarios del subsidio de vivienda (...) no podían hacer cosa distinta que la de relacionarlos en la lista de beneficiarios”*; por tanto el señor CARLOS HERNANDO LOPEZ estaba obligado a seleccionar a unos proponentes por cuanto según el jurista, dichas personas demostraron según el SISBEN su estratificación y cumplían con los requisitos del caso, y si la información era errónea, no cabía culpa de ello a su defendido; finalmente se dice que los hechos no deben ser descontextualizados mediante su cotejo con documentos elaborados 3 años después.

Pasa el doctor HECTOR EFRAIN ORJUELA GARCIA, en el escrito radicado ante la Procuraduría Regional de Boyacá con fecha 22 de abril de 2016, a referirse en relación a la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, afirmando que no asiste razón a la Primera Instancia para asegurar la ocurrencia de un conflicto de intereses, ya que no se demostró que la señora RAMOS CORREA haya decidido con sus acciones en relación a lo actuado en la adjudicación a los beneficiarios de



los subsidios de vivienda a que se refieren las diligencias, calificando como coincidencia el que el padre de las hijas de la disciplinada se postulara, cumpliera los requisitos y fuera beneficiario de uno de dichos subsidios, no siendo esto fundamento suficiente para afirmar responsabilidad disciplinaria; se reitera que en los actos decisorios dentro del proceso de selección de beneficiarios, la señora RAMOS CORREA no tuvo intervención y además, que las falsedades en las cuales pudiera incurrir el señor ROVIN HELVER VARGAS PEDRAZA, padre de las hijas de la señora RAMOS CORREA, son directamente responsabilidad de él y es él quien deberá responder por las consecuencias de lo actuado, más no es posible por ello dar responsabilidad a la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA. Se hace referencia al haber atribuido dolo a lo actuado por la señora RAMOS CORREA, señalando que no es posible dicha tipificación, toda vez que no es aplicable al caso ya que la disciplinada conocedora de sus deberes *“(...) los cumplió a cabalidad y jamás tuvo intención de transgredirlos”*, seguidamente señala *“(...) es por esta razón que no participo de manera activa en el proceso de selección, marginándose de evaluar y calificar a los postulantes”*, observando que fue demostrado dentro del proceso que la señora RAMOS no participó en lo relacionado con lo realizado. Finaliza el escrito presentado por el doctor ORJUELA GARCIA, asegurando que *“(...) es forzoso concluir que se debe revocar íntegramente el fallo impugnado”*.

### **CONSIDERACIONES DE LA REGIONAL**

En consideración a la facultad otorgada a este despacho para proferir decisión en esta instancia, es necesario analizar la procedencia y trámite dado al asunto. Así las cosas, la Procuraduría Regional procede a pronunciarse respecto a lo expuesto por la Defensa del señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS.

En atención a lo solicitado, esta instancia puede señalar, que la actividad de la Procuraduría Regional en el caso que nos ocupa, se remite a la revisión detallada de los argumentos expuestos por la defensa del señor CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS y la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA tanto en los alegatos de conclusión presentados a la primera instancia, como a los argumentos defensivos esgrimidos en desarrollo de la Segunda Instancia por el doctor HECTOR EFRAIN ORJUELA GARCIA, mediante escrito radicado ante la Procuraduría Regional de Boyacá con fecha 22 de abril de 2016, realizando una contraposición con los diferentes elementos probatorios que hacen parte de las diligencias y procurando con ello el dilucidar la verdad de los hechos.

Así las cosas, encuentra el Despacho, que no asisten suficientes elementos legales a los argumentos defensivos presentados en las diferentes etapas procesales por parte de los apoderados de los disciplinados, que permitan



menoscabar la existencia real de la conducta irregular indilgada a los disciplinados. Para el caso del señor CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS, se encuentra plenamente demostrado que la publicidad dada a los actos con los cuales se desarrolló la convocatoria adelantada para la asignación de los subsidios de vivienda motivo de las diligencias, se realizó en forma no adecuada a la normatividad vigente para ese momento y en menoscabo del derecho general, sin tomar en cuenta la existencia de otras posibilidades de difusión, con mayor eficiencia y garantías, que darían de forma efectiva cumplimiento en los términos exigidos por la ley en tales casos; no es posible desconocer que en otros eventos en los que la administración municipal tuvo que realizar publicidad de sus actividades, se acudió al perifoneo y emisoras radiales, que si bien, no tienen base en el municipio de Cuitiva, si tienen señal y más aún audiencia en toda la jurisdicción de ese municipio y en especial en la cabecera municipal; considera así esta Regional que la simple publicación hecha en la cartelera de la Alcaldía, no es garantía real de publicidad a tan importante y trascendente actividad contractual y más aún cuando ella redundaría en el bienestar de los más necesitados y vulnerables, siendo este tema un fin esencial del Estado Social de Derecho. Como se dijo, aun cuando se publicó en la cartelera de la alcaldía, no era este el medio más expedito; a juicio de esta Procuraduría Regional, no se realizaron las gestiones necesarias ni se agotaron debidamente los medios y/o canales con los que se podría llegar a una mayor difusión, logrando así maximizar su divulgación, ya que la convocatoria y en general el beneficio a entregar, se encontraba dirigido a toda la comunidad.

Considera importante el Despacho, recordar para el caso en particular, lo dispuesto en el Artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, en donde se estableció la responsabilidad que atañe a las entidades Estatales, en garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación, dejando como obligación que dicha publicidad se realizará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública “SECOP”, en el sitio web indicado por el administrador. Lo anterior quiere decir que por cada proceso de selección que adelante una entidad pública debe existir en el SECOP la publicación del proceso.

Por otra parte, encuentra razón esta instancia a los señalamientos hechos por el A-quo, en relación a las incongruencias que existen cuando se habla de la presentación primaria de 50 postulantes, para luego pasar a solo 20 beneficiarios; esto sumado al hecho, que existen elementos testimoniales como es el caso de los señores SAMUEL RAMOS RIVERA y ÁNGEL URIEL CORREA RAMOS, que indican que en los 50 supuestos postulantes, se presentaron nombres de personas que desconocían el motivo por el cual aparecen inscritos en tal lista sin ellos haber realizado trámite alguno para ello; no existiendo evidencia documental de la postulación realizada por dichas 50 personas y aún más grave para el caso que nos ocupa, que no existe registro de inscripción previa a la adjudicación de



beneficio y solo se cuenta con los documentos presentados por los 20 beneficiarios finales. En este aspecto halla razón ésta instancia a los señalamientos realizados por la Procuraduría Provincial de Sogamoso, relacionados con contradicciones presentadas en las intervenciones realizadas por algunos de los beneficiarios finales del subsidio de vivienda motivo de las diligencias, en donde no existe acuerdo congruente con la forma en la cual realizaron su inscripción para acceder a los beneficios ofrecidos.

En relación al segundo cargo imputado al señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, puede señalarse, que la inclusión en el Decreto 40 del 12 de diciembre de 2012, emitido por el investigado, del artículo 3º en el que se dijo *“(...) La información falsa o fraudulenta soportada inhabilitará (sic) inhabilita la postulación y anula de manera absoluta el acto de otorgamiento particular del subsidio”*, considera este Despacho que no puede tomarse como motivo suficiente para eximir de responsabilidad al disciplinado, toda vez que la presentación de información falsa o fraudulenta por parte de cualquiera de los beneficiario, debía ser verificada por parte del señor CARLOS HERENDO LÓPEZ ROJAS, quien manifestó dentro del plenario que se encargó personalmente de dicha verificación, por tanto el no cumplir por él mismo impuesta y aún más, como lo exigen los procedimientos establecidos para la adjudicación de subsidios, denota descuido, negligente y el no cumplimiento del deber funcional, que como se ha dicho no solo le imponía la normatividad, sino de igual manera, por decisión personal fue una imposición voluntaria y reconocida dentro del plenario por el señor CARLOS HERENDO LÓPEZ ROJAS, quien de ejercer tal función de forma adecuada, podría haber evitado que personas como JORGE NELSON CRUZ RIAÑO, JUAN CARLOS CARDOZO MORALES, VÍCTOR ÁNGEL CARDOZO PIRAGAUTA y FLOR ÁNGELA MACÍAS RIVERA, quienes les figuran propiedades a su nombre, accedieran a subsidios a los cuales no tenían derecho. Es de conocimiento público, que este tipo de consultas en donde se requiere la verificación de información de personas, se puede realizar de forma rápida y efectiva por vía electrónica en los portales de las diferentes entidades de registro y control; por tanto no es de recibo tal negligencia.

Sumado a lo anterior se encuentra que el señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, afirmó dentro del plenario, que debido a sus actividades tenía conocimiento de la situación socio-económica de las personas del municipio y por tanto no es lógico que omitiera que los subsidios de vivienda a otorgar, debían ser asignados a personas sin posibilidad o recursos para acceder a casa propia. Es el señor LÓPEZ ROJAS quien realizó las evaluaciones y asignación de los puntajes de los postulantes y solo él quien tenía bajo responsabilidad el velar por el cumplimiento de los preceptos legales establecidos para acceder a los subsidios motivo de las diligencias; permitiendo en algunos de los casos que personas sin el lleno de los requisitos legales, logaran beneficiarse con la adjudicación del subsidio de vivienda, presentándose así el incremento patrimonial a favor de



terceros señalado en el cargo, prueba suficiente de ello es la adjudicación de subsidios a personas que contaban con propiedades a su nombre y por tanto no merecedoras legales de tal beneficio, vulnerándose la finalidad del subsidio.

En relación a la autorización dada a los quejosos para contar con copias de lo actuado, esta Regional se suma a lo señalado por la Procuraduría Provincial en cuanto a que *“(...) el presente proceso se adelanta por el trámite de proceso verbal, por ende el auto de citación a audiencia hace las veces de la calificación del mérito de la investigación con la formulación del pliego de cargos, etapa a partir de la cual cesa la reserva de la actuación disciplinaria. Conforme lo dispone el artículo 95 de la ley 734 de 2002”*.

Finalmente en lo que tiene que ver con el señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, y lo expresado en el escrito presentado con fecha 22 de abril de 2016, por el doctor HECTOR EFRAIN ORJUELA GARCIA, en el cual manifiesta la existencia de defecto sustantivo por la falta de congruencia entre los hechos y actos referidos y las disposiciones normativas invocadas como sustento; encuentra el Despacho, que no cabe razón al doctor HECTOR EFRAIN ORJUELA, toda vez que como se dijo en su propia exposición a folio 581 del expediente actual, el A-quo *“(...) de manera reiterada admitió”* y/o corrigió tal error, dando la claridad necesaria y dirección adecuada a la actuación y por tanto dejando aclarado el posible yerro.

En cuanto a lo que trata con la existencia en el fallo de Primera Instancia de una responsabilidad objetiva, basando la misma en que no se pudo o se procuró determinar el servidor público en el que recaía la obligación de cumplir con la publicación a que se refieren las diligencias, este Despacho señala, que la defensa no toma en cuenta, que el mismo señor CARLOS HERNANDO LOPEZ, dentro las intervenciones realizadas en el plenario, como se dijo anteriormente, aseguró que asumió el proceso y/o la responsabilidad en forma personal en relación a los subsidios de vivienda; más un, no se tiene en cuenta, que si bien, puede existir responsabilidad en uno u otro funcionario en relación a la función administrativa de girar los documentos necesarios para lograr la publicación a que se refiere el proceso, dicha responsabilidad no es la base de la acusación y decisión tomada en primera instancia, sino que la misma se encuentra dirigida al deber funcional de control y verificación que debía ejercer el burgomaestre sobre los eventos cumplidos dentro de la administración por el dirigida y sumado a ello, el reconocimiento por el mismo señor CARLOS HERNANDO LOPEZ, referida con el hecho que él asumió de forma personal lo relacionado con tal adjudicación; reconocimiento que deja sin piso la necesidad de buscar mayor número de responsables, cuando es el mismo señor LOPEZ es quien se responsabiliza personalmente, excluyendo tajantemente a otro u otros servidores.





En lo que tiene que ver con el supuesto de violación del Principio de Legalidad por parte de la Primera Instancia, ya que no le asistía deber en publicar la lista de beneficiarios de los subsidios motivo de diligencias al disciplinado, puede el Despacho en este punto señalar que, como se dijo anteriormente, el posible yerro existente en relación a la identificación del documento administrativo a que se refiere tal deber, fue dilucidado en forma amplia y adecuada por la Primera Instancia; por otra parte, no es posible que se pretenda afirmar la inexistencia del deber de publicidad, cuando dicho deber es reconocido en repetidas oportunidades por el disciplinado y la defensa dentro del plenario, cuando se afirma que el deber se cumplió mediante la presentación en la cartelera de las instalaciones de la administración municipal y la inexistencia de otros medios de publicidad; ¿sino existe el deber, cual es la razón para pretender justificar tal cumplimiento?.

Ahora bien, en lo referente con la existencia de violación al Principio de la Buena Fe dentro de la actuación disciplinaria, basando la afirmación en cuanto al deber que asistía al señor CARLOS HERNANDO LOPEZ de aplicar dicho principio a los documentos presentados por los postulantes, teniendo como cierto todo lo allí afirmado, sin mayor análisis por parte del burgomaestre, aun cuando éste reconoció el haber asumido la responsabilidad en forma personal del proceso motivo de las diligencias; queda fuera de la lógica jurídica, el aspirar que se asuma tal posición como argumento de defensa valido, ya que no se puede pretender que el funcionarios público simplemente se limitó a recepcionar los documentos y pasarlos sin mayor análisis, teniendo en cuenta que le asiste el deber de salvaguardar la seguridad administrativa y financiera del Estado, más aún, cuando se trata de recursos que buscan subsanar deficiencias y necesidades que aquejan a sus administrados. Por otra parte, el sugerir que se releva del deber al servidor, por la existencia de la posibilidad de revocar el acto administrativo tras probar de firma posterior la existencia de anomalías en los hechos que dieron motivo a su surgimiento, se encuentra en total contravía con el postulado de economía que rige la función pública, no solo en lo que tiene que ver con lo económico, sino de igual manera con el aumento de los trámites administrativos a cumplir; de darse razón a lo afirmado por el argumento defensivo, estaríamos a portas de autorizar en forma flagrante no solo el incumplimiento de los deberes funcionales del servidor público, sino de la misma forma el desgaste innecesario de los recursos públicos, olvidando que más que una función represiva, la normatividad reguladora de la actividad pública se encuentra dirigida a la prevención como elemento esencial.



Se afirma que en la imputación de cargos hecha por el A-quo, se da por descontada la mala fe de la administración al beneficiar a quienes no tenían derecho y se observa que las pruebas que dieron lugar a la identificación de posibles beneficiarios que no tenían derecho al subsidio de vivienda, “(...) surgieron y fueron conocidas mucho tiempo después de producida la adjudicación”, no siendo el señor CARLOS HERNANDO LOPEZ quien escrituró los inmuebles que a la postre constituyen el subsidio. En este punto el Despacho no encuentra razón a tal afirmación, pues la actuación disciplinaria desarrollada y valorada por esta regional, se dirigió a establecer probatoriamente las afirmaciones realizadas dentro de la queja presentada, por tanto no es el A-quo quien asume la existencia del hecho en violación del Principio de Buena Fe, sino que se trata de encontrar elementos que permitan descartar una afirmación presentada por quien se encuentra en desacuerdo de lo actuado por la administración municipal de Cuitiva. Como se dijo en argumentación anterior de esta decisión, los elementos con los cuales cuentan los servidores públicos para verificar la veracidad de la información suministrada y documentos aportados por los ciudadanos, para acceder a beneficios como el que es motivo de las diligencias, son amplios y variados, entre los que se cuenta el acceso a la base de datos de otras entidades en forma electrónica y remota, así como la solicitud escrita a los mismos; podemos reiterar, la base de datos del Registro de Instrumentos Públicos y no solo lo relacionado con el registro SISBEN. El mismo señor CARLOS HERNANDO LOPEZ ha reconocido dentro del plenario, que contaba con el conocimiento en relación a la situación socio-económica de los residentes en su municipio, motivo mayor para apoyar la decisión tomada por la Primera Instancia, ya que no solo se omitió el realizar un adecuado análisis de los proponentes al subsidio, por intermedio de las posibilidades técnicas y electrónicas que la realidad actual brindaba, sino de la misma forma prefirió ignorar su saber personal. No es de recibo que se pretenda asegurar que el señor CARLOS HERNANDO LOPEZ, estaba obligado a seleccionar a los proponentes por el solo hecho de estar registrado en el SISBEN.

Pasa el despacho al análisis de lo expresado en favor de la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, quien asegura que existe un yerro jurídico en lo actuado, que afecta sustancialmente el debido proceso y su derecho a la defensa, yerro basado en la supuesta ambigüedad de la falta indilgada a ella; puede esta Regional señalar, que una vez analizados los diferentes elementos que componen el plenario y en especial la formulación del cargo en contra de la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, no se aprecia ambigüedad en lo destacado por la Procuraduría Provincial de Sogamoso, ya que la misma realiza una amplia exposición de los motivos que dan lugar a la acción disciplinaria, pasando a determinar en concordancia con dichos motivos, la violación normativa dada por el proceder de la servidora pública que no es otra que el faltar a sus deberes implícitos en el artículo 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, en el que se señala:



*“(...) **ARTÍCULO 34. DEBERES.** Son deberes de todo servidor público:*

*1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente”.*

Violación normativa que se refleja en la medida que en ejercicio de su cargo como Secretaria de Hacienda del municipio de Cuitiva, hizo parte del Comité de Vivienda en el año 2011, participando activamente en la convocatoria para ejecutar el programa de vivienda de interés social denominado Urbanización Bochica, convocatoria a la que se presentó como postulantes el señor ROVIN HELVER VARGAS PEDRAZA padre de la hija de la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, quien resultó favorecido para recibir subsidio de vivienda. Encuentra el Despacho que hay elementos suficientes, que permiten afirmar que la señora RAMOS CORREA desconoció que le asistía el deber de declararse impedida a la luz del Artículo 40 de la ley 734 de 2002, en el que se determina:

*“(...) **ARTÍCULO 40. CONFLICTO DE INTERESES.** Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.*

*Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido”.*

Por tanto, la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, al no observar la existencia de motivos suficientes para declararse impedida en el proceso de convocatoria del programa de vivienda de interés social denominado Urbanización Bochica, siendo miembro del Comité de Vivienda en el año 2011 del municipio de Cuitiva, se vio incurso en la falta prevista en el artículo 48 numeral 17 de la Ley 734 de 2002, en donde se advierte:

*“(...) **ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS.** Son faltas gravísimas las siguientes:*

*(...)*

*17. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales.*



*Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de una persona en quien concurra causal de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de intereses”.*

Se puede afirmar lo anterior, teniendo en cuenta que se encuentra debidamente probado dentro del plenario que la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, actuó en los trámites y etapas de la convocatoria mencionada, a pesar de existir un conflicto de intereses frente al postulado ROVIN HELVER VARGAS PEDRAZA, quien es padre de su hija; afirmación que encuentra sustento en el hecho de que la señora RAMOS CORREA, aseguro que se declaró impedida verbalmente ante el Secretario de Gobierno del Municipio, pero no existen elementos que confirmen tal aseveración; por otra parte la no existencia de su firma en las actuaciones adelantadas para la recepción de documentos y evaluación de beneficiarios, no es motivo suficiente para asegurar el que no ejerciera algún tipo de injerencia en dichos procesos, dada su posición y/o cargo dentro de la administración municipal y más aún, dentro del comité encargado de adelantar tales gestiones, lo que se corrobora en su participación dentro de la entrega de los subsidios.

Es importante señalar que el señor ROVIN HELVER VARGAS PEDRAZA, se presenta como padre cabeza de familia, afirmando que vive junto a su hija NICCOL ESTAFANY VARGAS, hecho que entra en contradicción con lo afirmado por la disciplinada quien a lo largo de las diligencias aseguro que no convivía con el padre de su hija, pero si con la menor. No es de recibo para el Despacho, el que se pretenda asegurar que no existía interés por parte de la disciplinada en beneficiar al señor VARGAS PEDRAZA, cuando se permite el lleno de requisitos mediante la utilización de la figura de padre cabeza de familia, siendo la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA conocedora de la realidad de los hechos y del beneficio que implica para su hija la adquisición de tal subsidio por parte de su señor padre.

En lo referido a lo expuesto por el doctor HECTOR EFRAIN ORJUELA GARCIA, en el escrito radicado con fecha 22 de abril de 2016, en relación a la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, esta Regional reitera que si se puede afirmar la existencia de un conflicto de intereses, ya que ampliamente se demostró que la señora RAMOS CORREA, tenía conocimiento de la postulación del padre de su hija al beneficio ofrecido por el municipio, y más aún, tenía conocimiento de los requisitos y exigencias relacionadas con dicha convocatoria; exigencias que incluían en el caso del señor ROVIN HELVER VARGAS PEDRAZA, ser padre cabeza de familia, por tanto, no puede la defensa pretender afirmar que lo actuado por tal señor VARGAS PEDRAZA se encontraba fuera del conocimiento de la señora RAMOS CORREA, ya que es ella misma quien afirmo haberse declarado impedida en forma verbal ante el Secretario de Gobierno del Municipio por cuanto el señor VARGAS PEDRAZA era postulante del proceso de selección; aún más, con tal conocimiento la señora RAMOS CORREA se encontraba en el deber de



informar que dicho señor, no cumplía con los requisitos exigidos y en especial lo relacionado con ser padre cabeza de familia o que el documento en tal sentido se encontraba basado en falsedad.

Lo relacionado con el dolo atribuido a lo actuado por la señora RAMOS CORREA, este Despacho como se argumentó anteriormente, encuentra acertada la calificación dada por la Procuraduría Provincial, ya que existen los elementos probatorios necesarios para llegar sin lugar a duda a determinar la existencia del Dolo.

Entonces, esta Regional encuentra que la Procuraduría Provincial de Sogamoso en la decisión tomada como despacho de Primera Instancia, realizó una amplia y adecuada exposición de motivos tanto facticos como jurídicos, basados en los elementos documentales y probatorios existentes en el plenario, que permiten demostrar plena y adecuadamente, conforme a la normatividad vigente para el caso, la responsabilidad de los aquí disciplinados en la comisión de las faltas a ellos indilgadas, no encontrando así esta instancia asidero a las afirmaciones realizadas en defensa de los disciplinados, que pretenden desestimar sin justificación la existencia de los cargos a ellos indilgados; cada uno de los elementos probatorios arrimados al plenario, al ser analizados en forma sistemática y adecuada han creado para el caso que nos ocupa un conocimiento real de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos, permitiendo disipar cada una de las inquietudes y dudas que en un principio pudieron existir, llegando así a una certeza absoluta y un fallo sancionatorio.

Es indudable para esta Instancia a la luz de los elementos probatorios existentes, que en relación al señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, en su condición de Alcalde del municipio de Cuitiva– Boyacá, se encuentran materializados los cargos formulados, en lo que tiene que ver con los actos de publicación de la adjudicación del subsidios de vivienda de interés social del proyecto Urbanización Bochica y la asignación de los subsidios a los ciudadanos JORGE NELSON CRUZ RIAÑO, JUAN CARLOS CARDOZO MORALES, VÍCTOR ÁNGEL CARDOZO PIRAGAUTA, FLOR ÁNGELA MACÍAS RIVERA Y MARIA EUGENIA LEMUS RODRÍGUEZ, llevado a cabo en la misma fecha; por lo cual se le atribuye la comisión de la infracción de varias disposiciones de la ley disciplinaria, lo que constituye un concurso ideal de faltas, dado que con varias acciones infringe tantos preceptos normativos; por tanto la Procuraduría Provincial de Sogamoso de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 numeral 2. literal a) de la ley 734 de 2002, decidió aplicar sanción disciplinaria consistente en DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL por el término de Once (11) años, al señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, teniendo en cuenta de la falta fue calificada de manera definitiva como GRAVÍSIMA, a título de CULPA GRAVÍSIMA.



De igual manera en relación a en relación a la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, en su condición de Secretaria de Hacienda de Cuitiva– Boyacá, esta Regional encuentra materializado y no desvirtuado el cargo formulado en relación con su intervención en la gestión de la convocatoria adelantada en el año 2011 por el municipio de Cuitiva para la asignación de subsidios de vivienda de interés social del proyecto Urbanización Bochica, sin que se declarara impedida ante la intervención en dicho proceso por parte del señor ROVIN HELVER VARGAS PEDRAZA, padre de su menor hija NICCOL ESTAFANY VARGAS, quien resultó favorecido; por lo que se califica por parte del A-quo la falta encontrada como falta gravísima a título de dolo, asignando por esto como sanción, la DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL por el término de Diez (10) años, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 44 numeral 1 de la Ley 734 de 2002.

Así las cosas, esta instancia considera que la Procuraduría Provincial de Sogamoso efectuó una adecuada valoración e interpretación de los elementos materiales probatorios existentes en el expediente, apareciendo en ellos reunidos los requisitos exigidos en el Artículo 73 de la Ley 734 de 2002; por tanto, se pudo determinar la existencia de la responsabilidad disciplinaria del señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, en su condición de Alcalde del municipio de Cuitiva– Boyacá y la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, en su condición de Secretaria de Hacienda de Cuitiva– Boyacá, de acuerdo a los hechos que dieron origen a las diligencias. Por consiguiente este despacho considera que la decisión tomada por parte de la Procuraduría Provincial de Sogamoso, de declarar disciplinariamente responsable y sancionar al señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía 9398351, en su condición de Alcalde de Cuitiva– Boyacá, he imponer sanción disciplinaria consistente en DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL por el término de ONCE (11) años y de declarar disciplinariamente responsable y sancionar a la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía 1051522053, en su condición de Secretaria de Hacienda y miembro del comité de vivienda de la Alcaldía de Cuitiva, he imponer sanción disciplinaria consistente en DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL por el término de DIEZ AÑOS, se encuentra acorde con los parámetros normativos y procedimentales exigidos para tal caso.

Como quiera que los servidores públicos, tiene una connotación especial, son ellos quienes deben dar ejemplo a la sociedad, observando una conducta ejemplarizante en sus acciones, dignos de imitar, máxime si el cargo que se ocupa es de elección popular o en custodia de los intereses y el beneficio ciudadano, exigiendo por ello el correcto ejercicio de la función pública, pues ésta hace que el ciudadano deposite su confianza en una persona de recto proceder, que debe observar un perfil de buen ciudadano, persona integra llena de valores éticos, morales, con responsabilidad social y sobretodo cumplidora del ordenamiento



jurídico. Confianza que de igual manera el servidor elegido debe continuar no solo en su ámbito laboral, sino de igual forma en el social y personal.

Los bienes jurídicos tutelados por este orden normativo son fundamentalmente, el adecuado funcionamiento del Estado y prestar una apropiada garantía para el debido comportamiento de los servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes derivados de sus propios cargos. Busca, entonces, el derecho disciplinario y todo el andamiaje normativo que le es propio, que el factor humano del aparato estatal trabaje dentro del cumplimiento de sus deberes, sin conductas anormales y cuando éstas concurren, efectuará las actuaciones necesarias para sancionar a los infractores.

Al respecto, la Corte Constitucional al analizar la finalidad del derecho disciplinario, expresó que:

*“Disciplina que encuentra fundamento en la “... Relación de subordinación que existe entre el funcionario y la administración en el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, la violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc”. Por ello el régimen disciplinario cubre a la totalidad de los servidores públicos a quienes corresponde estar al servicio del Estado y de la comunidad (C.N., Art. 123). Dado que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad (C.P., art. 209)”<sup>36</sup>.*

En consecuencia y de acuerdo a los argumentos de esta instancia, la única alternativa posible y viable jurídicamente es CONFIRMAR lo dispuesto por la Procuraduría Provincial de Sogamoso dentro de Audiencia Pública realizada el día 26 de noviembre de 2015 dentro del proceso Verbal identificado con el **IUS-2015-231032 / IUC-2015-571-779836**, adelantado en contra del señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, en su condición de Alcalde del municipio de Cuitiva– Boyacá y la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, en su condición de Secretaria de Hacienda de Cuitiva– Boyacá, imponiendo sanción disciplinaria al señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía 9398351, en su condición de Alcalde de Cuitiva– Boyacá, de DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL por el término de ONCE (11) años y a la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía 1051522053, en su condición de Secretaria de Hacienda y miembro del comité de vivienda de la Alcaldía de Cuitiva, de DESTITUCIÓN E

---

<sup>36</sup> Sentencias C-948 de 2002 MP. Dr. Álvaro Tafur Galvis y C-115 de 2002



INHABILIDAD GENERAL por el término de DIEZ AÑOS.

En mérito de lo expuesto, la Procuradora Regional de Boyacá, en ejercicio de sus facultades legales,

### **R E S U E L V E:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la decisión tomada por la Procuraduría Provincial de Sogamoso, en desarrollo de Audiencia Pública realizada el día 26 de noviembre de 2015 dentro del proceso Verbal identificado con el IUS-2015-231032 / IUC-2015-571-779836, mediante el cual se decide imponer sanción disciplinaria al señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía 9398351, en su condición de Alcalde de Cuitiva– Boyacá, de DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL por el término de ONCE (11) años y a la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía 1051522053, en su condición de Secretaria de Hacienda y miembro del comité de vivienda de la Alcaldía de Cuitiva, de DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL por el término de DIEZ (10) AÑOS, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente proveído.

**SEGUNDO:** Notificar por la Secretaría de la Provincial de Sogamoso, la presente decisión al señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ ROJAS y a la señora MIRZA YANETH RAMOS CORREA, informándoles que contra la misma no procede recurso alguno, por estar agotada la vía gubernativa; para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación.

En caso de que no pudiese notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del Artículo 107 de la Ley 734 de 2002.

**TERCERO:** Ordenar que por la Secretaría de esta Regional, se devuelvan las diligencias a la oficina de origen, previas las anotaciones que sean del caso.

### **NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE**

*Original firmado por:*

**ADELA LUZ RAMIREZ CASTAÑO.**  
Procuradora Regional de Boyacá

//Bjsf.